

Resumen Ejecutivo

El presente no es destino: América Latina y el Caribe frente a la tarea de construir otro futuro

Economía, desigualdad, crimen organizado, democracia y Casa Común

Balance Regional 2025-2026

CONSEJO EPISCOPAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CENTRO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
OBSERVATORIO SOCIO-ANTROPOLÓGICO PASTORAL

Elaborado por el OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA (ODSA).
Miembro RED ODSAL - ODUCAL



CONSEJO EPISCOPAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CENTRO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
OBSERVATORIO SOCIO-ANTROPOLÓGICO PASTORAL

Resumen Ejecutivo

El presente no es destino: América Latina y el Caribe frente a la tarea de construir otro futuro

Economía, desigualdad, crimen organizado, democracia y Casa Común

Balance Regional 2025-2026

ELABORADO POR EL OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA (ODSA)

MIEMBRO DE LA RED DE OBSERVATORIOS DE LA DEUDA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (RED ODSAL)

Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL)

AUTORIDADES

CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO – CELAM

Presidente
Mons. Jaime Spengler

Primer Vicepresidente
Mons. José Luis Azuaje

Segundo Vicepresidente
Mons. José Domingo Ulloa

Pdte. del Consejo de Asuntos Económicos
Mons. Santiago Rodríguez

Secretario General
Mons. Lizardo Estrada

Secretario General Adjunto
Pbro. Eric García

Coordinador Consejo del CGC
Mons. Ricardo Morales

Director del CGC
Mg. Guillermo Sandoval

Coordinador Consejo del CPC
Mons. Daniel Francisco Blanco

Director del CPC
Dr. Óscar Elizalde Prada

RESPONSABLES DEL PROYECTO

CENTRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CELAM

Coordinadora del Observatorio Socioantropológico y Pastoral, OSAP
Dra. Jeanette Rincón

OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA

Coordinador del estudio. Investigador ODSA UCA-REDODSAL
Dr. Agustín Salvia

Autoras
Dra. María Noel Fachal
Lic. Nazarena Bauso
Lic. Miranda Correa

Asistencia técnica
Mónica D´Amico

Reflexión Teológico Pastoral
Pbro. José Carlos Caamaño

© Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño – Celam
Avenida Boyacá N° 169D-75
Código postal 111166
PBX: 601 484 5804
celam@celam.org
www.celam.org.

Diagramación
Lucila Bonardi | Nazarena Gómez Arechaga
Revisión de estilo
Mónica D'Amico
Imágenes de portada
"Agua y saneamiento, Panamá" por Banco Mundial América Latina y el Caribe, CC BY-NC-ND 2.0
"Piletas litio Atacama". Fuente: NASA's Goddard Space Flight Center
"Puerto Buenos Aires". Fuente: Rafael Rodrigues | Pexels

Autores: María Noel Fachal, Nazarena Bauso, Miranda Correa; Agustín Salvia (Coordinador). El presente no es destino: América Latina y el Caribe frente a la tarea de construir otro futuro. Economía, desigualdad, crimen organizado, democracia y Casa Común. Balance Regional 2025-2026. - Observatorio de la Deuda Social Argentina - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EDUCA, 2026.

50 p.; 22 x 22 cm

10 ejemplares

Edición para Fundación Universidad Católica Argentina

ISBN 978-987-620-649-5

1. Desarrollo humano integral. 2. Desigualdades territoriales. 3. Crimen organizado.

CDD 300

DOI:

El presente Resumen Ejecutivo fue elaborado en el marco de un convenio específico entre el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) y la Fundación Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires", a través de su Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), asociada a la Red de Observatorios de la Deuda Social en América Latina (Red ODSAL). Su objeto es documentar la realización del proyecto de investigación: "Estudio diagnóstico sociopolítico-económico-ambiental para América Latina y el Caribe, en un escenario de desigualdades sociales persistentes, deterioro ambiental, debilitamiento de las democracias y el Estado de Derecho en la Región (2025-2026)". La propiedad intelectual de los reportes de investigación pertenece al Celam. Octubre, 2026.

Libro editado y hecho en la Argentina
Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723
@Fundación Universidad Católica Argentina
Av. Alicia M. de Justo 1300
Buenos Aires - Argentina

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o cualquier otro sistema de archivo y recuperación de la información, sin mención de la fuente.
Los autores del presente estudio ceden sus derechos en forma exclusiva a la Universidad Católica Argentina para que esta pueda incorporar la versión digital del mismo a su Repositorio Institucional, así como también a otras bases de datos que considere de relevancia académica.
Este documento ha sido elaborado en el contexto del proyecto Red ODSAL. La Red de Observatorios de la Deuda Social en Universidades Católicas de América Latina es un espacio académico bajo la coordinación de ODUCAL creado para generar opinión sobre la problemática de la deuda social en América Latina.
Los informes publicados son responsabilidad de sus autores y no comprometen la opinión de la Universidad Católica Argentina.
© 2026, Derechos reservados por Fundación Universidad Católica Argentina.

Inscrito bajo la licencia Creative Commons - Non Commercial - ShareAlike 4.0 International. CCBY-NC-SA4.0



Las opiniones expresadas en el presente reporte de investigación son de responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente la postura institucional del Celam.

Índice

Prólogo 8

Introducción 10

1. Escenario global 13

2. El crimen organizado como actor de poder en América Latina y el Caribe 19

3. La región en cuatro dimensiones

A. Situación económico-ocupacional 22

B. Situación social 26

C. Situación sociopolítica 30

D. Situación socioambiental 35

Conclusiones 39

Fuentes de gráficos y diagramas 40

Reflexiones Teológico-Pastorales 42



Prólogo

América Latina y el Caribe son tierras de profundas riquezas humanas, culturales y espirituales, pero también de dolorosas contradicciones. Nuestros pueblos conservan una extraordinaria capacidad de resistencia, solidaridad y esperanza, aun en medio de situaciones de pobreza, exclusión, violencia y deterioro ambiental que comprometen la dignidad de millones de personas. Como Iglesia, estamos llamados a escuchar el clamor de nuestros pueblos y a reconocer los signos de los tiempos.

El presente informe, correspondiente al bienio 2025-2026, constituye una nueva contribución del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), a través de su Centro de Gestión del Conocimiento y en colaboración con la Red de Observatorios de la Deuda Social de América Latina y el Caribe (Red ODSAL), a esta tarea de discernimiento. Responde así a un compromiso de nuestro Plan Global 2023-2027: generar conocimiento fundado en evidencias que oriente el compromiso pastoral y social de la Iglesia.

El diagnóstico nos presenta una Región que ha logrado avances importantes, pero que continúa enfrentando deudas históricas que no podemos considerar inevitables. La reducción de la pobreza y la recuperación de ciertos indicadores son motivos de esperanza. Sin embargo, estos progresos conviven con desigualdades persistentes, economías que no generan suficientes empleos decentes y sistemas de protección social insuficientes. No basta con que nuestras economías crezcan si ese crecimiento no se traduce en una vida más digna para todos. Detrás de cada indicador hay rostros concretos —niños, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes— que Aparecida nos enseñó a reconocer no solo como “explotados”, sino como “sobrantes” y “desechables” (DA 65).

La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe quiso reavivar el espíritu de Aparecida y hacerse cargo de sus deudas. Este informe muestra que varias siguen abiertas y que surgen otras amenazas de gravedad creciente. La expansión del crimen organizado, la violencia y las economías ilícitas debilitan las instituciones y llegan a disputar el control de territorios y comunidades. Nos duele especialmente que tantos jóvenes, privados de horizontes de futuro, queden expuestos a la explotación y al reclutamiento criminal. Lo que nuestra Iglesia continental ha llamado “violencia institucionalizada” encuentra aquí categorías precisas para comprenderla: gobernanza criminal, captura institucional y narcocultura. La paz no puede reducirse a la ausencia de violencia: requiere justicia, inclusión y respeto irrestricto por la dignidad humana.

También nos inquieta el debilitamiento de la convivencia democrática. La polarización, la desconfianza en las instituciones, la corrupción y las tentaciones autoritarias amenazan la posibilidad de construir proyectos compartidos. La democracia no puede limitarse al ejercicio periódico del voto. Como recuerda el papa León XIV en ***Magnifica humanitas***, no se sustenta únicamente en normas y procedimientos, sino "en una relación leal con los hechos y en una orientación real hacia el bien de las personas" (n. 134).

El clamor de los pobres es inseparable del clamor de la Tierra. La riqueza ambiental de la Región no siempre se transforma en bienestar para sus pueblos: con frecuencia, los beneficios de su aprovechamiento se concentran, mientras sus costos recaen sobre quienes tienen menos posibilidades de defender sus territorios. El informe nos recuerda, además, que nuestros países no están aislados de las grandes transformaciones del mundo, que pueden abrir caminos de progreso, pero también profundizar las desigualdades.

Ante este panorama, nuestra mirada creyente reconoce, sin embargo, semillas de esperanza en las familias que sostienen la vida cotidiana, en las comunidades que se organizan y en quienes defienden los derechos humanos y los bienes naturales. Nuestra vocación sinodal nos llama a ser, como propone el Plan Global, una "fraternidad compasiva y transformadora en el corazón de un mundo herido". No se trata solamente de asistir a quienes padecen las consecuencias de la desigualdad, sino de transformar las condiciones que la reproducen. En la exhortación apostólica ***Dilexi te*** se nos dice: "Debemos comprometernos cada vez más para resolver las causas estructurales de la pobreza" (n. 94).

Por ello, valoramos especialmente el esfuerzo de quienes han hecho posible esta investigación. Conocer la realidad es una forma de asumir responsabilidad frente a ella. Deseamos que este informe anime la reflexión de nuestras Iglesias particulares, fortalezca el diálogo con las sociedades y sus gobiernos, y nos ayude a pasar de la preocupación a la acción, de la indiferencia al encuentro y del diagnóstico al compromiso.

Confiamos este esfuerzo a Nuestra Señora de Guadalupe, Madre y Patrona de América, para que nos ayude a perseverar, con valentía y ternura, en la construcción de una América Latina y un Caribe más justos, fraternos y solidarios.

+ Mons. Lizardo Estrada Herrera
Arzobispo Coadjutor de Cusco (Perú)
Secretario General del Celam



Introducción

«La dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora, no mañana».

Dilexi te, N ° 92

América Latina y el Caribe atraviesa el bienio 2025-2026 en un escenario internacional de incertidumbre económica, cambios tecnológicos acelerados y conflictos geopolíticos. Al mismo tiempo, enfrenta problemas persistentes, ligados al bajo crecimiento, desigualdades, fragilidad democrática, expansión de las economías ilícitas y deterioro ambiental.

Los avances recientes conviven con privaciones que afectan de manera desigual a países, territorios y grupos sociales. Las condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales están conectadas, y sus efectos suelen acumularse sobre quienes tienen menos recursos para afrontar las crisis.

La pobreza, la informalidad laboral, las dificultades de acceso a la protección social, la inseguridad, la fragilidad institucional y la exposición a los impactos ambientales expresan, en distintos planos, desigualdades que atraviesan a la región y que se reproducen entre generaciones y territorios.

Comprender esta realidad exige mirar más allá de los cambios de corto plazo e identificar las condiciones que mantienen las desigualdades. Como en ediciones anteriores, el presente informe parte de la convicción de que el conocimiento de la realidad constituye una condición necesaria para orientar respuestas que amplíen las oportunidades de desarrollo y fortalezcan la vida en comunidad.

Esta tarea se inscribe en la misión del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) que, a través de su Centro de Gestión del Conocimiento y del Observatorio Socio-Antropológico Pastoral, promueve una comprensión de la realidad latinoamericana y caribeña que articule el conocimiento científico con el compromiso pastoral.

En esa misma dirección, la Red de Observatorios de la Deuda Social de América Latina y el Caribe (Red ODSAL) busca contribuir, mediante la producción y sistematización de evidencia, a una mejor comprensión de las desigualdades y de los procesos que afectan las condiciones de vida de los pueblos de la región.

Fruto de este esfuerzo conjunto, este documento resume los principales hallazgos de un informe regional más amplio que identifica dónde se concentran las privaciones, quiénes afrontan mayores dificultades y qué posibilidades de acción tienen los Estados, la sociedad civil y las comunidades eclesiales. Se

propone una lectura del escenario regional a partir de tres decisiones que distinguen esta edición.

1. Sitúa a América Latina y el Caribe en el contexto mundial y considera procesos que se definen fuera de sus fronteras, pero inciden en su desarrollo.

2. Incorpora el crimen organizado como una dimensión transversal, por sus efectos sobre las instituciones, la economía y la vida cotidiana.

3. Organiza el diagnóstico según las cuatro zonas de trabajo del CELAM —Bolivariana, Caribe, México y Centroamérica (CAMEX) y Cono Sur—, para reconocer sus diferencias y la diversidad que existe dentro de cada una.

El informe completo se organiza en tres capítulos. El primero examina seis procesos globales que condicionan su desarrollo: cambios en el comercio y las finanzas, la expansión de las economías ilícitas, la concentración del desarrollo de inteligencia artificial, la violencia armada y desplazamientos forzados, las transformaciones de los regímenes democráticos y la emergencia climática.

El segundo aborda el crimen organizado como actor de poder y propone las principales categorías para comprender su presencia en los territorios, las instituciones y las relaciones económicas y sociales.

El tercero examina el panorama regional en base a cuatro dimensiones, que abarcan la situación económico-ocupacional, social, sociopolítica y socioambiental. En cada una se identifican desafíos persistentes y sus efectos sobre distintos grupos y territorios.

El recorrido muestra una realidad atravesada, al mismo tiempo, por signos de avance y de retroceso. Algunos indicadores registran mejoras recientes, pero persisten niveles elevados de pobreza, informalidad, desigualdad, violencia y vulnerabilidad ambiental. También se advierten transformaciones que abren oportunidades, como los cambios tecnológicos, la recuperación de algunos mercados de trabajo o el fortalecimiento de iniciativas sociales y comunitarias. Reconocer esta coexistencia permite evitar tanto las lecturas fatalistas como las que reducen los problemas estructurales a fluctuaciones coyunturales.

Muchas de las brechas descritas dependen, en parte, de decisiones económicas, institucionales y políticas. No son, por lo tanto, destinos inevitables. Reconocerlo implica responsabilidad, pero también abre posibilidades de cambio, en tanto las desigualdades pueden enfrentarse mediante políticas públicas, iniciativas comunitarias y nuevas formas de cooperación.

En este punto, la presencia territorial de la Iglesia constituye un aporte particular porque allí donde las estadísticas encuentran límites para captar las experiencias concretas de las personas y las comunidades, la escucha, el acompañamiento y el conocimiento situado pueden hacer visibles necesidades, capacidades y desafíos que requieren respuestas integrales.

Con ese mismo propósito de vincular el diagnóstico con la acción pastoral, el documento se cierra con una reflexión teológico-pastoral del Pbro. José Carlos Caamaño (Facultad de Teología, UCA). Su propuesta es leer la desigualdad a la luz de la crítica bíblica a la idolatría: cuando la riqueza, el poder o cualquier proyecto humano se absolutiza, la exclusión y la invisibilización de los más pobres pasan a ser toleradas. Esa clave dialoga con la idea central de este informe de no tratar como inevitable aquello que depende de decisiones humanas.

Por eso, este resumen ejecutivo busca contribuir tanto a comprender la realidad como a orientar la acción. Poner la evidencia científica al servicio de la reflexión pastoral significa reconocer que las desigualdades pueden enfrentarse mediante políticas públicas, iniciativas comunitarias y nuevas formas de cooperación.

El conocimiento puede fortalecer el diálogo entre la academia, las políticas públicas, las organizaciones sociales y las comunidades eclesiales. El objetivo es que el diagnóstico sea un punto de partida para renovar el compromiso con una región más justa, solidaria y sostenible.

1. Escenario global

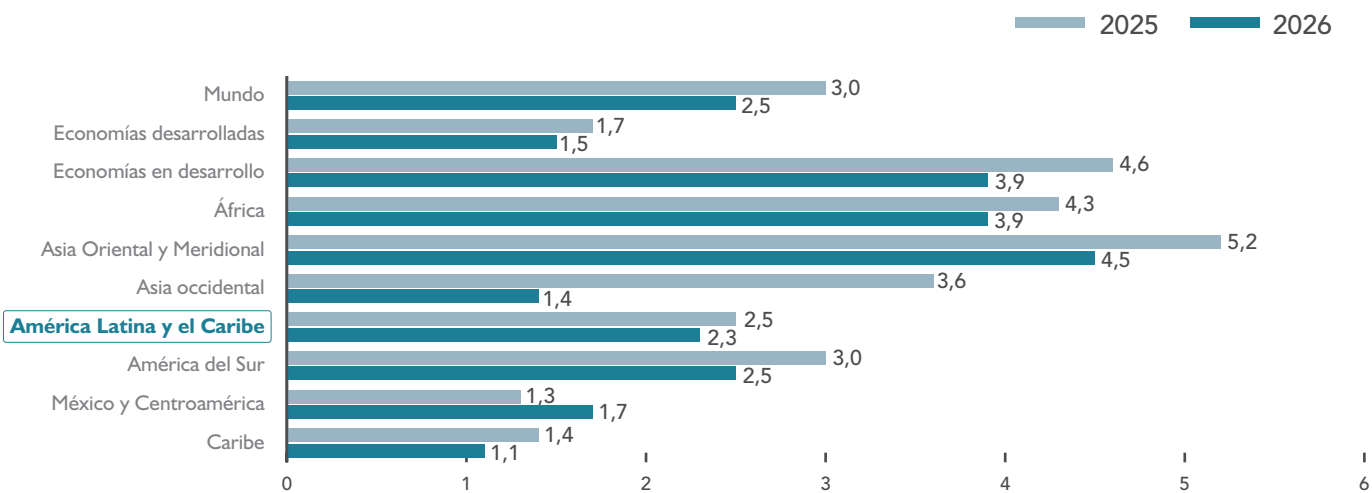
América Latina y el Caribe no puede comprenderse al margen de las transformaciones mundiales. Durante el bienio 2025-2026, procesos económicos, tecnológicos, políticos, sociales y ambientales, muchos originados fuera de la región, tienen efectos directos sobre la vida cotidiana de sus habitantes.

El escenario combina bajo crecimiento, cambios en el comercio mundial, expansión de economías ilícitas, desarrollo acelerado de inteligencia artificial, violencia y desplazamientos, tensiones democráticas y emergencia climática. Estas transformaciones se refuerzan entre sí y afectan de manera desigual a países y comunidades.

En el terreno económico, se evidencia que el crecimiento económico mundial sigue siendo moderado. Para 2026 se proyecta un aumento cercano al 2,5% a escala global y del 2,3% para América Latina y el Caribe, con diferencias importantes entre subregiones (Gráfico EG.1). Los conflictos geopolíticos y los cambios del comercio también inciden en los precios de la energía, los alimentos y otros insumos relevantes para las economías.

Estas tendencias repercuten en el costo de vida, las posibilidades de inversión, el empleo y los recursos de los Estados. Las organizaciones territoriales son las primeras en advertir sus efectos, por ejemplo, cuando crecen las demandas de asistencia alimentaria o el endeudamiento de los hogares.

Gráfico EG.1. Crecimiento del PIB real. Estimaciones para 2025 y proyecciones para 2026, por grupos de economías y regiones. Cambio porcentual anual.



Nota: Tasas ponderadas con tipos de cambio de mercado. El Caribe excluye a Guyana.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe "World Economic Situation and Prospects as of mid-2026" (ONU-DAES, enero 2026).

Las desigualdades económicas entre regiones del mundo siguen siendo profundas. En 2025, el PIB per cápita de América del Norte superó en un 242% el promedio mundial[1], mientras que en Europa y Asia Central la diferencia alcanzó el 108%. Asia Oriental y el Pacífico también se ubicó por encima del promedio, aunque con una distancia considerablemente menor (Gráfico EG.2).

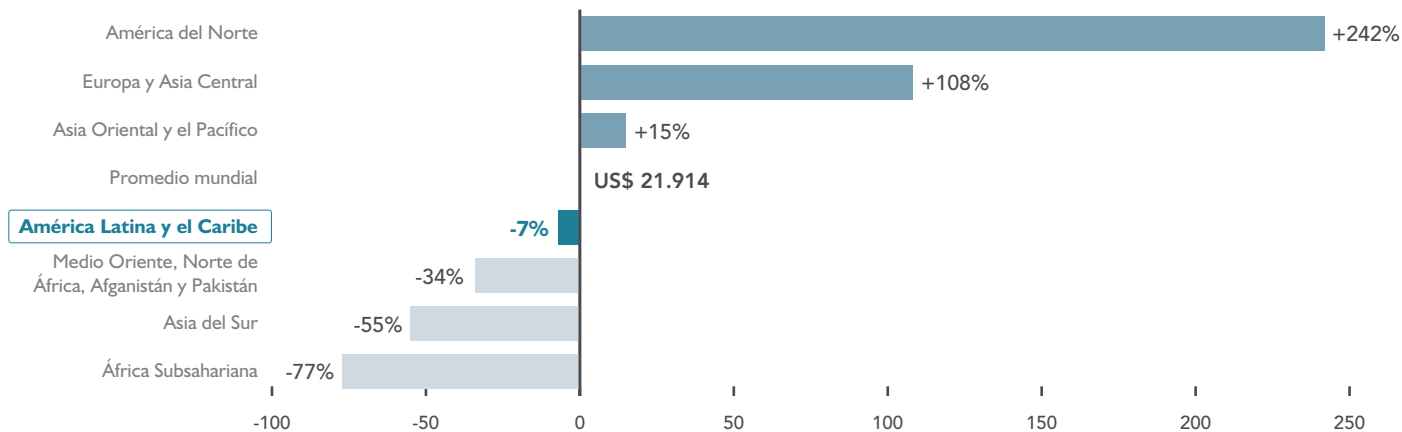
América Latina y el Caribe ocupa una posición intermedia en este escenario, ya que su PIB per cápita se encuentra apenas un 7% por debajo del promedio mundial, pero mantiene una brecha importante respecto de las regiones de mayores ingresos. Otras regiones presentan niveles aún más rezagados, como Medio Oriente, Norte de África, Afganistán y Pakistán (-34%), Asia del Sur (-55%) y África Subsahariana (-77%). Estas diferencias reflejan las profundas desigualdades en los niveles de desarrollo económico a escala mundial.

Sin embargo, las desigualdades no se expresan únicamente entre regiones, sino también en la distribución de los ingresos dentro de ellas. En América Latina, el 10% de la población adulta con mayores ingresos concentra el 57,4% del ingreso nacional antes de impuestos, mientras que la mitad de menores ingresos recibe apenas el 8%.

Esta concentración en el grupo de mayores ingresos es la más elevada entre las regiones comparadas, frente al 54,7% de África Subsahariana y el 36,4% de Europa (Gráfico EG.3).

En América Latina, un nivel de PIB per cápita relativamente cercano al promedio mundial convive con una marcada concentración del ingreso. Esto pone de manifiesto que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza una distribución más equitativa de los recursos ni mejores oportunidades para toda la población.

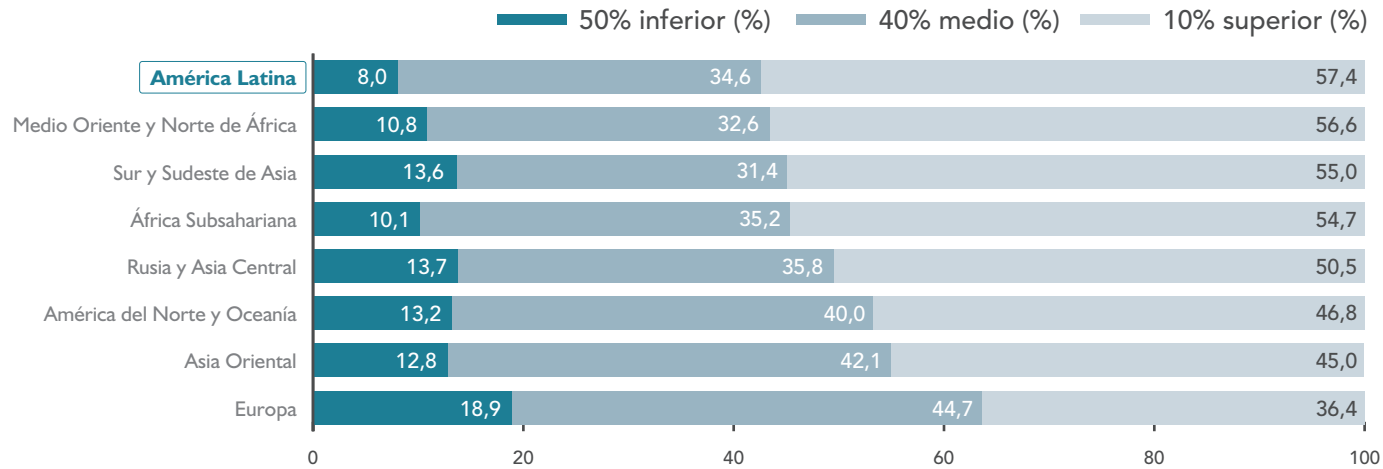
Gráfico EG.2. PIB per cápita de cada región en relación con el promedio mundial. Año 2025. Diferencia porcentual respecto del promedio mundial.



Nota: Las barras muestran cuánto más alto (+) o más bajo (–) es el PIB per cápita de cada región respecto del promedio mundial, que se indica con la línea punteada (0%). Un valor de –77% equivale a menos de una cuarta parte del promedio mundial. PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA), dólares internacionales constantes de 2021. Regiones según la clasificación del Banco Mundial. **Fuente:** Elaboración propia a partir de Banco Mundial, World Development Indicators.

1. Promedio mundial calculado en $21.914 dólares estadounidenses medidos con paridad de poder adquisitivo de 2021, lo cual permite comparar las regiones considerando el costo de vida en cada una de ellas.

Gráfico EG.3. Distribución del ingreso nacional antes de impuestos entre el 50% inferior, el 40% medio y el 10% superior de la población adulta, según regiones del mundo. Año 2025. En porcentajes.



Nota: Distribución del ingreso nacional antes de impuestos personales, estimada mediante encuestas, registros fiscales y cuentas nacionales. Se considera a la población mayor de 20 años.
Fuente: World Inequality Report 2026, World Inequality Lab.

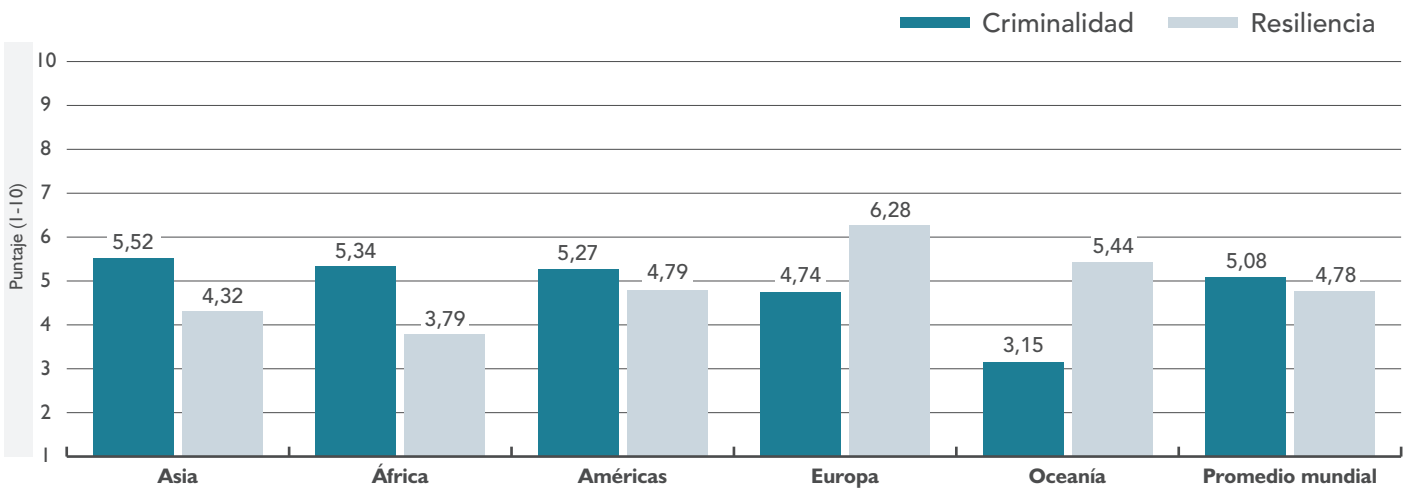
Al mismo tiempo, la expansión de las economías ilícitas se ha convertido en un factor que atraviesa cada vez más dimensiones de la vida social. El crimen organizado no solo genera violencia, sino que interviene sobre mercados locales, condiciona relaciones sociales y disputa a las instituciones la regulación de la vida comunitaria.

Según el Índice global de crimen organizado de 2025, elaborado por la Iniciativa Global Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, las Américas ocupan el tercer lugar entre las regiones analizadas en criminalidad, detrás de Asia y África. Su capacidad de respuesta frente al crimen organizado —denominada "resiliencia"— se sitúa cerca del promedio mundial (Gráfico EG.4).

El tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de activos muestran el carácter transnacional del crimen organizado. Las ganancias, además, pueden generarse lejos de los territorios que soportan sus mayores costos sociales y humanos.

Las mujeres y las niñas continúan estando especialmente expuestas a distintas formas de explotación y trata, mientras que las comunidades más vulnerables pueden quedar atrapadas entre la precariedad económica, la violencia y la presencia de actores criminales. Esta dimensión plantea un desafío que involucra tanto a los Estados como a las organizaciones sociales y comunitarias que acompañan a quienes padecen sus consecuencias.

Gráfico EG.4. Puntaje de criminalidad y de resiliencia frente al crimen organizado por continente. Año 2025. Escala de 1 a 10.



Nota: La criminalidad es el promedio de los puntajes de mercados y de actores criminales; una resiliencia mayor indica más capacidad estatal y social para contrarrestar el crimen organizado. Las Américas incluyen a América del Norte. Los cálculos incluyen a 193 países.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe "Índice global de crimen organizado 2025" (GI-TOC, 2025).

Por otro lado, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para mejorar la productividad y ampliar el acceso al conocimiento. Sin embargo, su desarrollo también puede profundizar diferencias entre países, sectores económicos y trabajadores.

La distribución de las capacidades tecnológicas y de las inversiones necesarias para desarrollarlas continúa siendo muy concentrada, mientras que los efectos sobre el mundo del trabajo son desiguales. Para aprovechar sus beneficios, los países necesitan mejorar la formación, el acceso digital y sus instituciones; de lo contrario, las brechas existentes pueden ampliarse.

En este contexto, la formación y el acompañamiento de las nuevas generaciones adquieren particular importancia, así como la necesidad de fortalecer capacidades para desenvolverse críticamente frente a la información que circula en los entornos digitales.

Los conflictos armados y los desplazamientos forzados también condicionan el escenario internacional. En 2025 se registraron numerosos conflictos con participación estatal, un gasto militar récord y una reducción de la ayuda económica oficial para países en desarrollo.

En América Latina y el Caribe, la violencia se expresa especialmente en homicidios, actividades de organizaciones criminales y desplazamientos forzados. La región acoge a numerosas personas obligadas a abandonar sus hogares, entre ellas una parte importante de la población venezolana que permanece dentro de la región.

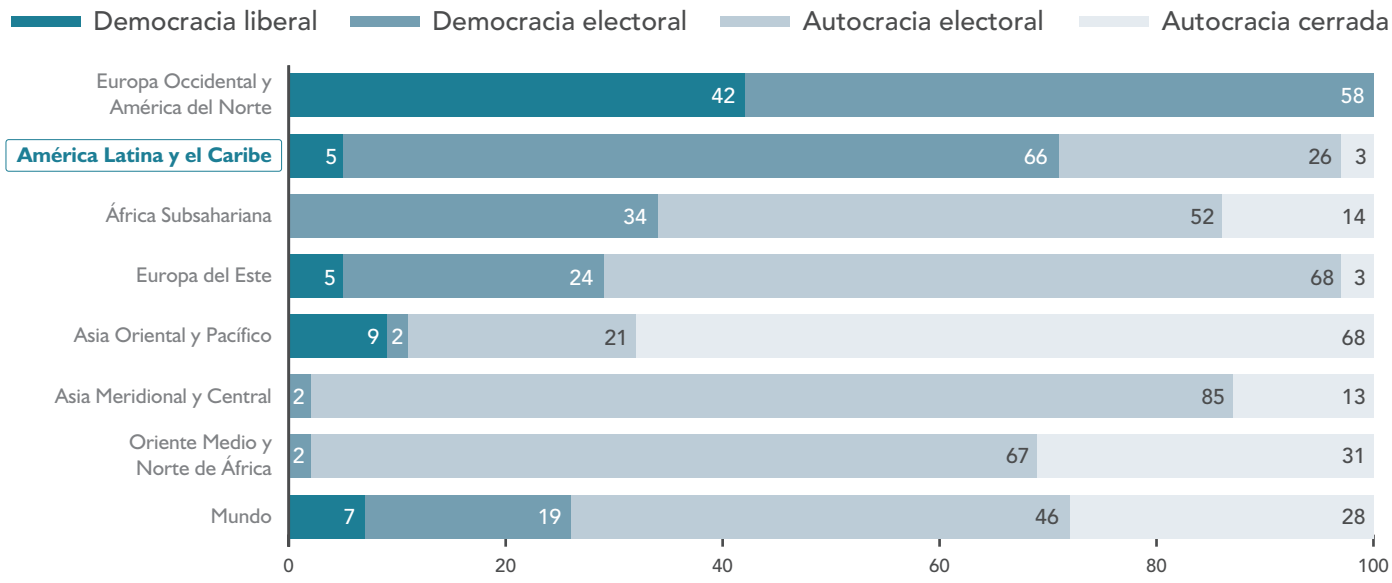
Frente a ello, la reducción del financiamiento humanitario aumenta la presión sobre los países y, especialmente, sobre las comunidades locales que sostienen tareas de asistencia, acompañamiento e integración. Allí, las redes sociales, comunitarias y eclesiales adquieren una relevancia particular para atender necesidades que muchas veces no quedan plenamente registradas por los sistemas estadísticos.

En paralelo, la calidad de la vida democrática constituye otra de las dimensiones decisivas del escenario global. América Latina y el Caribe conserva una presencia importante de regímenes democráticos en comparación con otras regiones, pero enfrenta señales de debilitamiento que merecen atención (Gráfico EG.5).

La pérdida de confianza en las instituciones, la reducción del espacio cívico y las dificultades para sostener ámbitos de diálogo y participación afectan las capacidades de las sociedades para procesar sus conflictos y construir respuestas colectivas.

En este contexto, preservar espacios de encuentro, participación y deliberación adquiere una importancia particular. Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones con presencia territorial, entre ellas las comunidades eclesiales, pueden contribuir a sostener vínculos sociales y ámbitos de participación allí donde las instituciones pierden capacidad de convocatoria.

Gráfico EG.5. Distribución de la población por tipo de régimen político, por región del mundo, 2025. En porcentajes.



Fuente: Elaboración propia a partir del "Informe sobre la democracia 2026: ¿El fin de la era democrática?" (Nord, et al, 2026).

La emergencia climática completa este escenario y pone de manifiesto, quizá con mayor claridad que ningún otro proceso, la estrecha relación entre las desigualdades sociales y ambientales.

La temperatura media mundial continúa alejándose de los niveles preindustriales y los fenómenos extremos afectan de manera creciente a distintas regiones. América Latina y el Caribe realiza una contribución relativamente menor a las emisiones globales, pero enfrenta una elevada exposición a los desastres y a sus consecuencias económicas y sociales.

La desigualdad de recursos para prevenir daños y recuperarse de ellos hace que las consecuencias ambientales tampoco se distribuyan de manera equitativa. La preparación comunitaria y el acompañamiento a las poblaciones afectadas son parte de las respuestas necesarias.

En conjunto, estas tendencias muestran que el escenario mundial afecta directamente la economía, la sociedad y la política regional. Comprenderlo exige observar quiénes aprovechan las oportunidades, quiénes enfrentan los mayores riesgos y qué capacidades pueden fortalecerse.

Reconocer las desigualdades del escenario global no equivale a aceptarlas como inevitables, sino identificar responsabilidades compartidas y posibilidades de acción. Esta perspectiva invita a evitar tanto una lectura exclusivamente centrada en las amenazas como una mirada fatalista sobre el futuro de la región. América Latina y el Caribe conserva capacidades institucionales, sociales y comunitarias que pueden contribuir a enfrentar los procesos en curso y abrir nuevas posibilidades de cooperación y transformación.

2. El crimen organizado como actor de poder en América Latina y el Caribe

En varios territorios de América Latina y el Caribe, el crimen organizado excede el ámbito de la seguridad y constituye un problema también político, económico y social más amplio. Afecta la vida cotidiana, condiciona actividades económicas y relaciones sociales y, en algunos casos, disputa a las instituciones públicas parte de su capacidad de regulación.

Para comprender este fenómeno, el informe distingue distintas formas de poder criminal. No alcanza con observar qué delitos se cometen, sino también identificar cómo se ejerce influencia sobre territorios, comunidades, y su relación con las instituciones.

En primer lugar, crimen organizado y violencia no son conceptos equivalentes. El primero supone formas relativamente estables de coordinación para realizar actividades ilícitas y obtener beneficios o capacidad de control. La violencia puede ser uno de sus instrumentos, pero no está presente del mismo modo en todos los contextos.

Por eso, una reducción de los homicidios no implica necesariamente menor influencia criminal. Puede coexistir con un mayor control territorial, acuerdos informales y reglas impuestas sobre la vida cotidiana que no siempre son captadas por indicadores tradicionales de seguridad. Los homicidios son un indicador relevante, pero no alcanzan por sí solos para medir ese poder.

Desde esta perspectiva, el concepto de gobernanza criminal describe situaciones en las que organizaciones criminales regulan aspectos de la vida comunitaria. Pueden establecer reglas sobre circulación, horarios, actividades permitidas, resolución de conflictos, funcionamiento de mercados y condiciones para trabajar o comerciar en un territorio.

Este control puede sostenerse mediante amenazas, pero también a través de ayudas, protección, mediación o provisión de recursos. Esas prácticas pueden generar dependencia y, en ocasiones, aceptación o legitimación social. Esta aceptación, sin embargo, no debe interpretarse automáticamente como expresión plena de consentimiento, ya que pueden desarrollarse en contextos de coerción, ausencia de alternativas o relaciones profundamente asimétricas.

La gobernanza criminal no implica necesariamente un "Estado paralelo". Puede aparecer donde las instituciones son débiles, pero también donde existen acuerdos, connivencia o cooptación de agentes estatales.

Esto lleva a distinguir otra dimensión, referida a la captura institucional. Esta ocurre cuando actores criminales influyen sobre decisiones públicas o utilizan organismos estatales para favorecer intereses ilícitos. Puede afectar la seguridad, la justicia, las contrataciones, la regulación económica o el financiamiento político. La gobernanza criminal y la captura institucional son diferentes, aunque pueden coexistir y reforzarse mutuamente.

El crimen organizado también tiene una dimensión cultural y simbólica, que el informe aborda mediante el concepto de narcocultura. Esta incluye relatos que asocian las actividades criminales con el reconocimiento, la pertenencia, el éxito o la movilidad social.

Estos relatos circulan en comunidades, plataformas digitales e industrias culturales; y pueden influir especialmente sobre las expectativas de adolescentes y jóvenes con oportunidades educativas, laborales y comunitarias limitadas.

La dimensión cultural se vincula, aunque no se confunde, con las estrategias mediante las cuales las organizaciones criminales buscan construir o reforzar sus vínculos con la población. Algunas organizaciones buscan reconocimiento mediante ayudas, obras comunitarias o el uso de símbolos religiosos. Estas prácticas pueden crear dependencia o disputar espacios de influencia a otras instituciones.

Las organizaciones sociales y eclesiales pueden ofrecer protección, acompañamiento y alternativas para las comunidades. A la vez, existe conciencia sobre las amenazas a las que se exponen sus referentes cuando denuncian hechos de violencia, median en conflictos o cuestionan el poder criminal.

La experiencia territorial resulta, en este sentido, especialmente relevante para reconocer situaciones que no siempre aparecen en las estadísticas. También permite reconocer las capacidades de organización y resistencia de las comunidades frente a estas formas de poder.

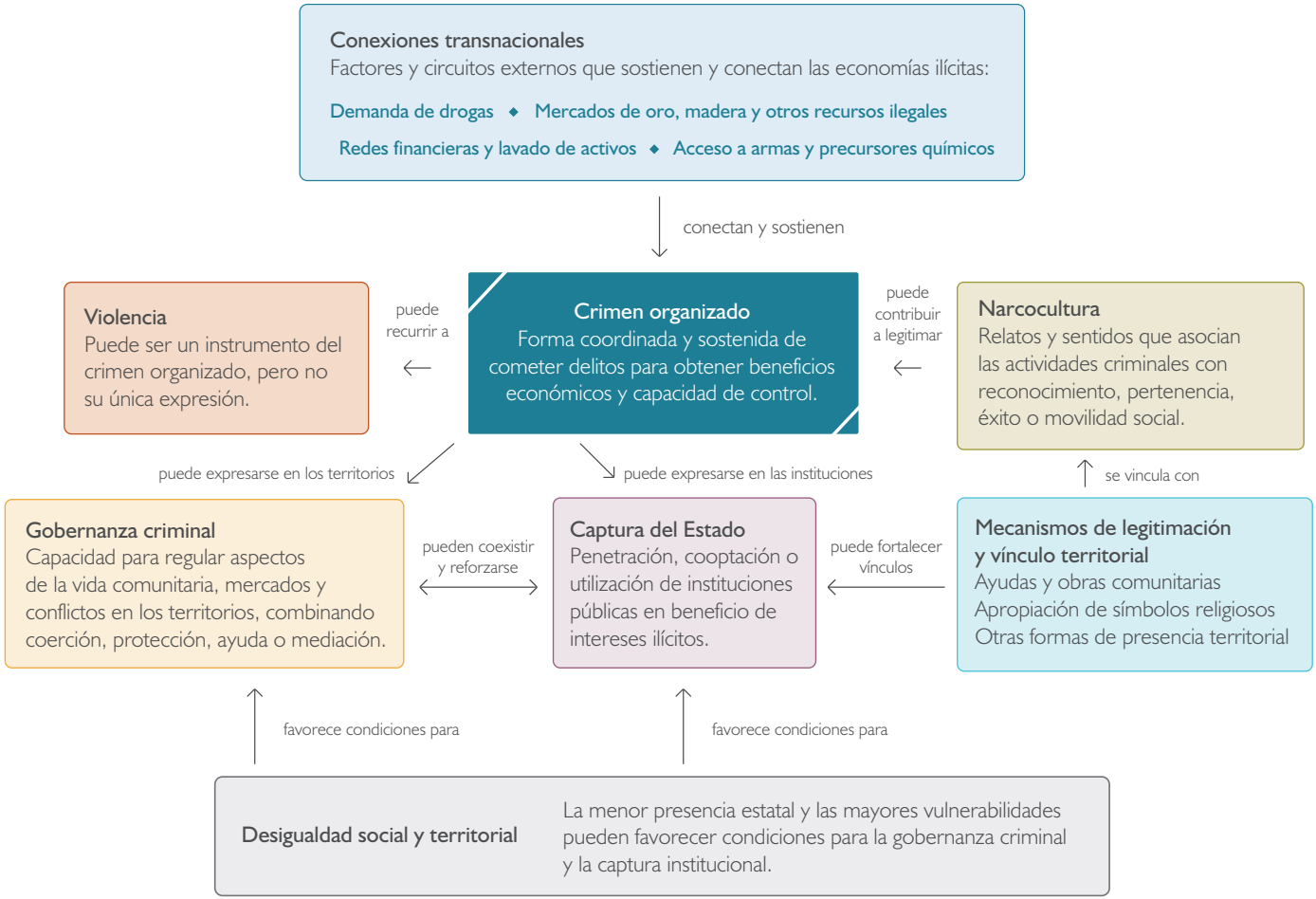
El crimen organizado tiene, además, conexiones transnacionales. Sus circuitos incluyen demanda de drogas, mercados de oro, madera y otros recursos ilegales, lavado de activos y acceso a armas y precursores químicos.

Por eso, los incentivos y las ganancias no se concentran necesariamente donde el fenómeno es más visible. Parte de los beneficios se obtiene en mercados de destino, mientras los costos sociales, institucionales, ambientales y humanos recaen con frecuencia sobre las comunidades de la región.

En este sentido, el crimen organizado debe comprenderse como un fenómeno multidimensional y transnacional, que puede influir sobre territorios, instituciones, economías y relaciones sociales al mismo tiempo. Aquí no se busca medir su magnitud, pero sí ofrecer herramientas para reconocer sus distintas expresiones.

Este enfoque también invita a examinar las capacidades institucionales, las desigualdades que afectan a las comunidades y las respuestas posibles para fortalecer la convivencia, la protección y el bien común.

Diagrama CO.1 Dimensiones del crimen organizado como actor de poder en América Latina y el Caribe.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de ONU (2000), Lessing (2021), Dammert y Sampó (2025), Luna y Feldmann (2025), Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2026a, 2026b), Mondaca Cota (2018) y Torres Gómez (2026).

3. La región en cuatro dimensiones

Este capítulo examina el panorama regional en cuatro dimensiones —económico-ocupacional, social, sociopolítica y socioambiental—, leídas desde las cuatro zonas del Celam. En cada una se identifican desafíos persistentes y sus efectos sobre distintos grupos y territorios, en un intento de acercamiento a los rostros concretos, historias de sufrimiento y aspiraciones legítimas que están detrás de cada indicador en cada territorio y que esperan una respuesta.

3.A. Situación económico-ocupacional

La economía de América Latina y el Caribe continúa creciendo, pero a un ritmo moderado e insuficiente para transformar sus principales problemas estructurales.

Para 2026 se prevé un crecimiento del 2,2%, algo por debajo del 2,4% estimado en 2025 (Gráfico SEO.1). Mientras algunas economías muestran mayores perspectivas de expansión —Paraguay y República Dominicana alcanzarían un crecimiento del 4,7%, Costa Rica y Guatemala del 3,3% y 3,7%, respectivamente—, otras enfrentan mayores dificultades, como Haití y Bolivia.

Como factores que explican este comportamiento, distintos organismos señalan el bajo impulso del consumo y la inversión, la incertidumbre mundial y los cambios del comercio internacional. También pesan las dificultades para fortalecer la producción y generar empleos de calidad.

La inversión extranjera directa es otra señal de las oportunidades de crecimiento. Tras la pandemia comenzó a recuperarse, aunque de manera desigual. En 2025, Ecuador, Honduras y Uruguay registraron aumentos importantes en la entrada de inversiones respecto de 2024.

La inflación interanual a septiembre de 2025 mantuvo la tendencia descendente iniciada a mediados de 2023. La desaceleración fue especialmente marcada en Argentina, aunque allí persisten tasas elevadas. Bolivia y Haití, en cambio, registraron mayores presiones sobre los precios.

Lograr reducir la inflación es una señal positiva, en tanto puede dar previsibilidad y proteger el poder de compra de las familias, pero no garantiza por sí sola mejores condiciones de vida. También importan los salarios, las oportunidades de empleo y la capacidad de los hogares para recuperar ingresos perdidos durante períodos de fuertes aumentos de precios.

El estado de las cuentas públicas también condiciona las decisiones económicas, ya que un endeudamiento elevado limita las posibilidades de acción a futuro de los Estados. Por eso, los gobiernos enfrentan debates difíciles en torno a cómo ordenar el gasto y sostener las finanzas públicas.

Para 2026 se prevé una reducción del gasto público primario en América Latina y una moderación del gasto total en el Caribe (Gráfico SEO.2). Aunque la deuda pública continúa en niveles altos, su peso respecto del tamaño de las economías se mantiene relativamente estable.

Estos debates se vuelven más complejos cuando las economías ilícitas agregan nuevos costos. El lavado de activos, la evasión de impuestos y la inseguridad pueden desalentar inversiones privadas, reducir la recaudación y exigir mayores recursos públicos. La presencia de sistemas judiciales débiles suele ser un componente clave que habilita este tipo de actividades delictivas.

Estimar sus efectos económicos resulta difícil por las limitaciones de información. Algunos estudios los sitúan hasta en el 13% del PIB regional (Carrión Mena, 2026). Más allá de esa estimación, las economías criminales se conectan con actividades formales e informales y pueden condicionar las oportunidades de desarrollo.

En términos de empleo, en 2026 aumenta la ocupación y se reduce el desempleo regional, pero la participación laboral apenas sufre modificaciones. Sin embargo, estos indicadores no permiten evaluar, por sí solos, la calidad de los puestos de trabajo ni la seguridad de los ingresos en economías con amplios sectores informales.

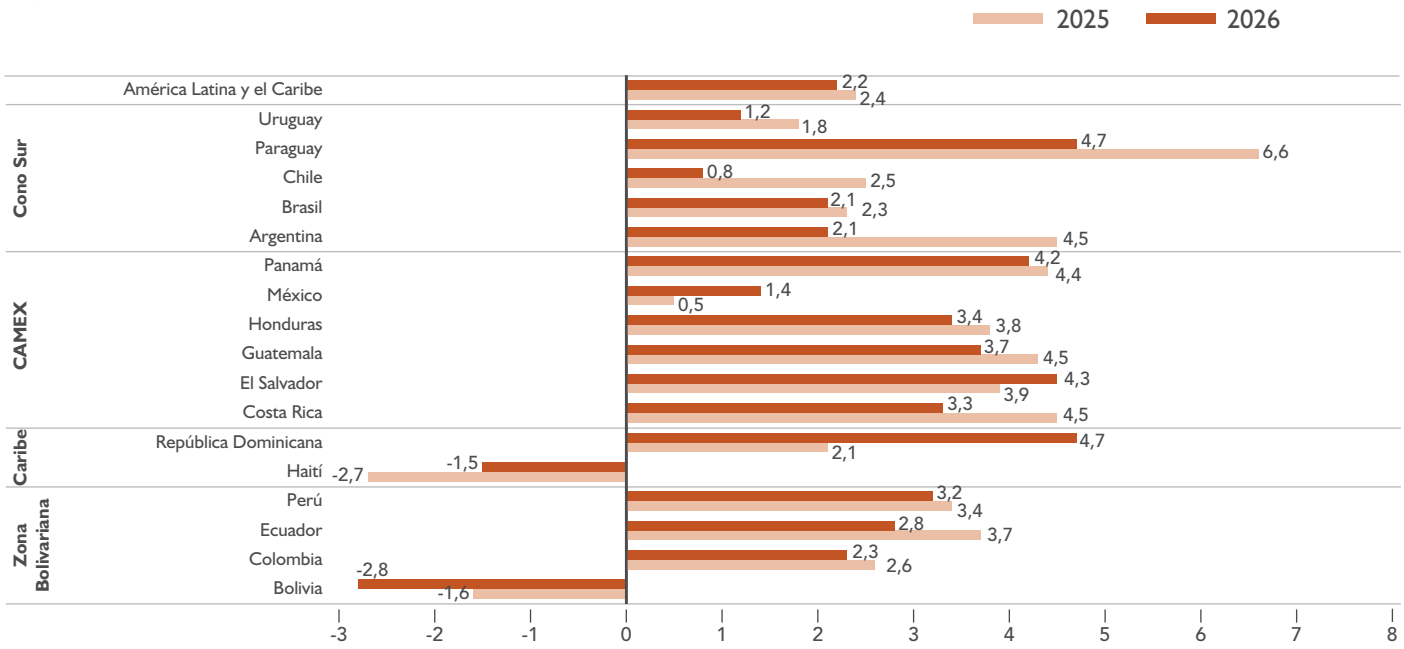
La informalidad laboral sigue siendo un problema central en la región (Gráfico SEO.3). En 2025 afectó al 46,5% de las personas ocupadas. Paraguay, Guatemala y Bolivia registran tasas de informalidad superiores al 60%. Se trata de un rasgo estructural que sólo puede ser superado por medio de políticas que, además de crear puestos de trabajo, logren mejorar el desarrollo productivo de las economías y expandir la protección social.

Las mujeres y las personas jóvenes siguen enfrentando mayores dificultades para acceder a empleos de calidad.

En la actualidad, los mercados laborales también cambian con la expansión de tecnologías digitales y, en particular, de la inteligencia artificial. Estas herramientas pueden mejorar la productividad y abrir actividades nuevas, pero también cambian las tareas y los conocimientos exigidos a los trabajadores.

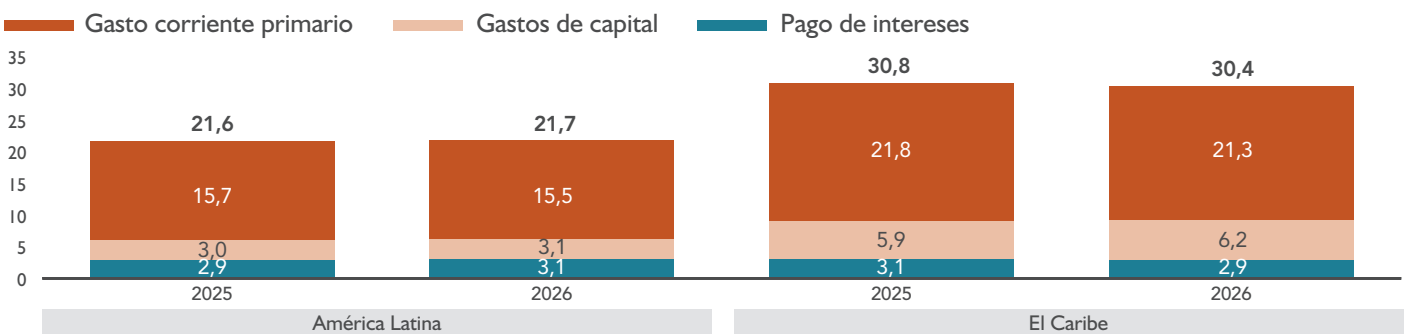
Que estos cambios produzcan beneficios amplios dependerá de la formación, el acceso a la tecnología y la capacidad productiva de cada país. Chile, Brasil y México se encuentran entre los países de la región destacados en innovación durante 2025.

Gráfico SEO.1. Crecimiento del PIB anual, estimaciones para 2025 y proyecciones para 2026, según países y zonas CELAM. En porcentajes.



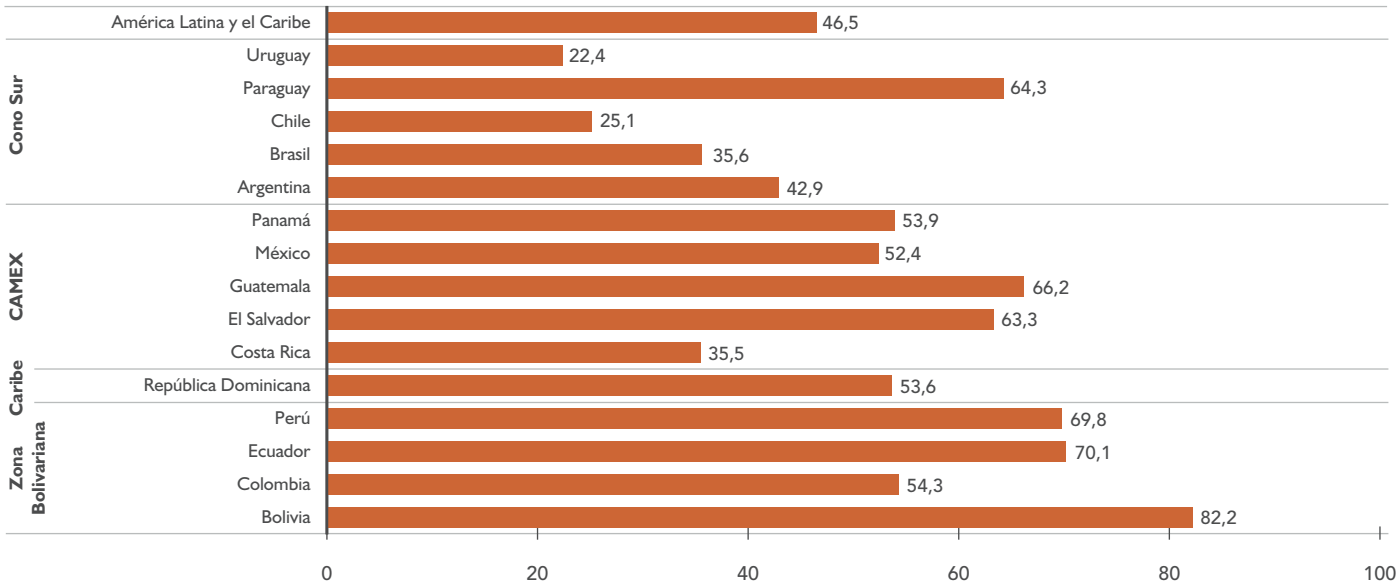
Fuente: Elaboración propia a partir del informe "Panorama económico de América Latina y el Caribe. Aprovechando la transición de la IA" (Banco Mundial, octubre 2026).

Gráfico SEO.2. Gasto total del gobierno central y composición 2025-2026. En porcentajes del PIB.



Nota: América Latina incluye los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. El Caribe incluye los siguientes países: Antigua y Barbuda, Bahamas (Las), Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tabago. En todos los casos las cifras de 2025 corresponden a estimaciones oficiales (CEPAL, 2026).
Fuente: Informe "Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026" (CEPAL, 2026).

Gráfico SEO.3. Tasa de informalidad laboral, según países y zonas CELAM. Año 2025. En porcentajes.



Nota: Los datos correspondientes para América Latina y el Caribe son proyecciones. América Latina y el Caribe incluyen a los siguientes países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe "Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe" (OIT, 2026) y del Informe "Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe" (CEPAL. 2025).

3.B. Situación social

La situación social de América Latina mejoró en los últimos años, pero esa mejora se está frenando y no alcanza a todos por igual. La pobreza por ingresos disminuyó del 32,7% en 2020 al 25,5% en 2024, afectando a unos 162 millones de personas, el valor más bajo desde que hay datos comparables. La pobreza extrema, por su parte, bajó al 9,8%.

La pobreza multidimensional, que incluye carencias en vivienda, salud, educación, empleo y protección social, pasó del 26,3% en 2019 al 20,9% en 2024. Mejoraron el acceso a internet, la educación de adultos y algunas condiciones habitacionales, pero los avances fueron menores en calidad del empleo y acceso al agua.

La disminución de la pobreza se concentró en pocos países: México y Brasil explican el 90% de su reducción regional en 2024. Sin ellos, la tasa habría bajado solo 0,8 puntos porcentuales y seguiría por encima del nivel de 2019.

La pobreza extrema aún supera en 2,1 puntos su mínimo de 2014. Para 2025, la CEPAL proyecta una baja de apenas 0,4 puntos en la pobreza por ingresos (25,1%) y una tasa de pobreza extrema sin cambios (9,8%) (Gráfico SS.1).

La infancia es uno de los grupos más afectados. En 2024, el 38,3% de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares pobres por ingresos, frente al 13,8% de las personas mayores. La pobreza también alcanzaba al 40,5% de los pueblos indígenas, frente al 17,7% de quienes no son indígenas ni afrodescendientes, y al 38,0% de la población rural, frente al 22,8% de la urbana.

A estas privaciones se suman otras violencias. Entre 2015 y 2022, 53.318 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio. Casi dos de cada tres niños de 1 a 14 años experimentan disciplina violenta en el hogar, y una de cada cinco niñas sufre violencia sexual antes de los 18 años.

La desigualdad de ingresos agrava este panorama (Gráfico SS.2). Según las encuestas de hogares, el 10% más rico de América Latina concentra, en promedio, el 34,2% de los ingresos, frente al 1,7% que recibe el 10% más pobre. Sin embargo, estimaciones que incorporan registros tributarios y cuentas nacionales muestran una concentración considerablemente mayor, con más de la mitad del ingreso en manos del 10% más rico (CEPAL, 2025b)[2].

En 2024, el coeficiente de Gini regional alcanzó 0,452, lo que sitúa a la región como la segunda más desigual del mundo luego de África Subsahariana. En Colombia, el 10% más rico recibió 4,6 veces más ingresos que el 40% más pobre de la población (43,6% versus 9,6%).

Brasil y Panamá también superan el 38% del ingreso concentrado en el 10% más rico. En Argentina, Uruguay y República Dominicana, en cambio, esa proporción no supera el 30,2%, y la relación entre los grupos comparados se sitúa alrededor de 1,7 a 1,8 veces.

2. Las estimaciones del World Inequality Lab, desarrollada en el primer apartado, y de la CEPAL no son directamente comparables. La CEPAL presenta promedios de indicadores construidos a partir de encuestas de hogares, mientras que el World Inequality Lab estima la distribución del ingreso nacional antes de impuestos entre adultos, combinando diversas fuentes estadísticas.

Las desigualdades también se observan en la esperanza de vida y la vivienda. La esperanza de vida regional llegó a 76 años, pero la diferencia entre Chile y Haití supera los quince años. El déficit habitacional, además, afecta a 66 millones de hogares y se relaciona, sobre todo, con las condiciones materiales de las viviendas.
En materia alimentaria, la subalimentación bajó al 5,1% en 2024, tras cuatro años de mejora. Las dificultades igualmente persisten, ya que, en Haití, el 83,5% de la población sufre inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras el Corredor Seco centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) presenta focos importantes de vulnerabilidad.

Los resultados de PISA 2025 también señalan dificultades en materia educativa. Siete de trece países de la región habrían retrocedido respecto de 2022, mientras Argentina registró su resultado más bajo en matemática.

La protección social presenta grandes diferencias entre países. La cobertura previsional llega al 98% en Chile y Uruguay, pero desciende hasta el 16% en algunos países de la región. El peso del gasto social en las cuentas públicas también varía y debe evaluarse junto con las necesidades de la población.

Las transferencias públicas muestran efectos muy distintos sobre la pobreza. En Brasil se estima que la reducen en 6,7 puntos porcentuales, mientras que en Honduras y El Salvador su impacto sería reducido. Esto muestra que no basta con tener programas, sino que también importan su cobertura, alcance y capacidad de protección.

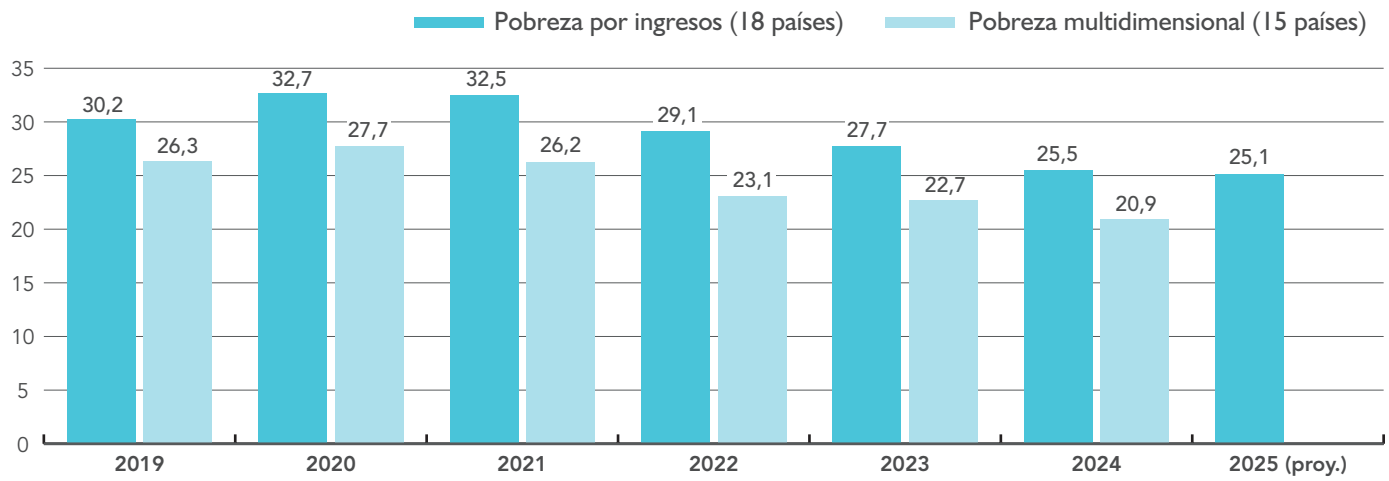
En 2025, América Latina y el Caribe registró 22,8 millones de personas en situación de desplazamiento forzado, por encima de África Oriental y Meridional y de Medio Oriente y el Norte de África (Gráfico SS.3). Haití, Centroamérica, Colombia y Venezuela figuran entre los principales focos, y Colombia se ubica ya entre los países con mayor desplazamiento interno del mundo (IDMC, 2026).

Estas cifras se explican mayormente por desplazamientos motivados por desastres climáticos o por la evacuación preventiva de los mismos. En otros contextos, como en Haití y en Colombia, estos desplazamientos se encuentran estrechamente vinculados con la violencia y el crimen organizado, que, además de expulsar población, controla rutas migratorias, explota a quienes las recorren y genera nuevas formas de extorsión.

La cuestión social no puede analizarse separada de la vida cotidiana en territorios donde el crimen organizado se ha consolidado. Allí, grupos criminales intervienen sobre la circulación, los horarios, las actividades económicas y la resolución de conflictos, y ofrecen a determinados jóvenes vínculos económicos, identitarios y de reconocimiento que ni el mercado formal ni las instituciones públicas logran proporcionar.

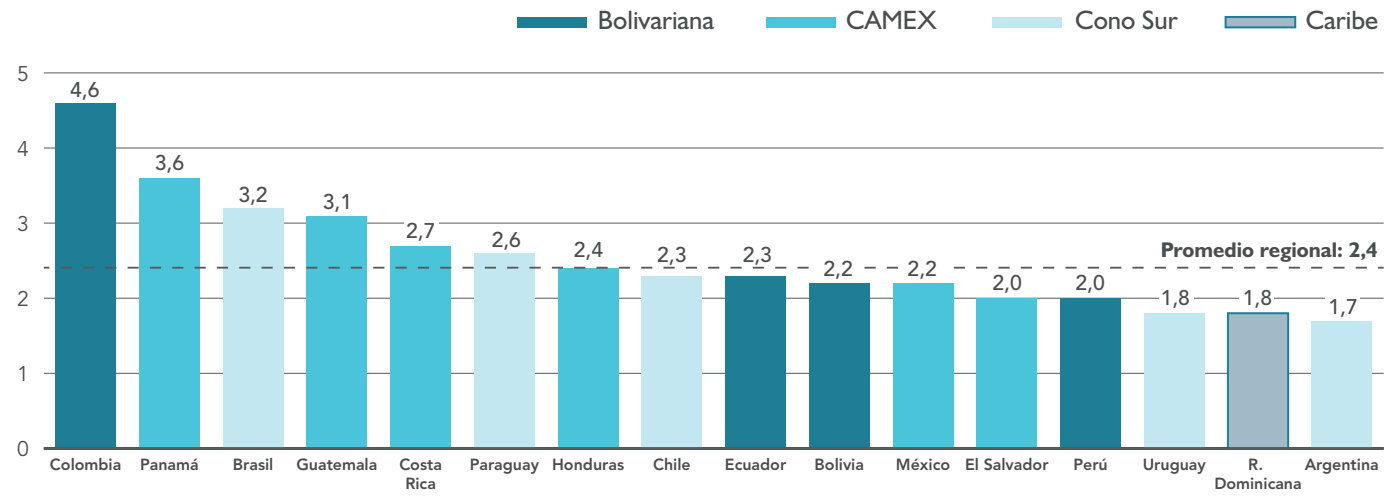
El caso más extremo es Haití, donde una coalición de pandillas controla entre el 85% y el 90% de Puerto Príncipe, ejerciendo funciones estatales como el cobro de impuestos, la administración de justicia e incluso servicios de salud.

Gráfico SS.1. Población en situación de pobreza por ingresos y de pobreza multidimensional, 2019-2025. En porcentajes.



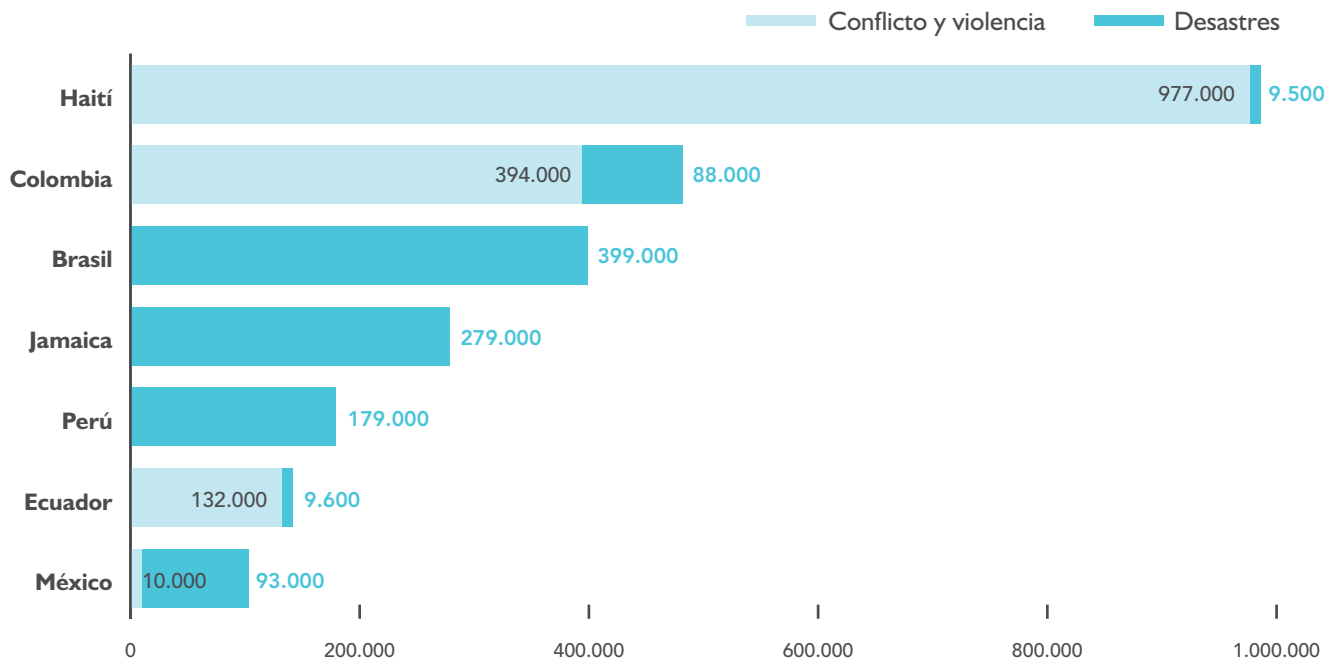
Nota: La proyección 2025 corresponde solo a la pobreza por ingresos (18 países); no existe proyección del mismo año sobre pobreza multidimensional (15 países, no incluye Guatemala, Nicaragua ni Venezuela).
Fuente: Elaboración propia a partir del informe "Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025" (CEPAL, 2025b).

Gráfico SS.2. Relación entre el ingreso del 10% más rico y el del 40% más pobre, según países y zonas CELAM, 2024. En veces.



Nota: Ingreso medido per cápita. Datos de 2023 para Bolivia, El Salvador y Guatemala y de 2022 para Chile.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe "Panorama Social de América Latina y el Caribe" (CEPAL, 2025b).

Gráfico SS.3. Desplazamientos forzados internos, según causa principal. Nuevos movimientos en 2025, en personas.



Nota: Las cifras son desplazamientos (movimientos), no personas. Se excluyen del gráfico a Chile y Cuba, que registran 1.502.000 y 753.000 desplazamientos por desastres, respectivamente, porque corresponden casi en su totalidad a evacuaciones preventivas: la alerta de tsunami de julio de 2025 y el huracán Melissa en octubre de 2025. No obstante, en el informe original se contabilizan dentro del número total de desplazamientos en la región.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe "Global Report on Internal Displacement" (IDMC, 2026).

3.C. Situación sociopolítica

En el bienio 2025-2026, la mayor parte de la población de América Latina y el Caribe vive en regímenes democráticos, pero solo una minoría lo hace en democracias liberales; es decir, donde la celebración de elecciones convive con un poder de gobierno limitado y se protegen los derechos individuales y de las minorías.

El 71% de la población regional vive en democracias, pero apenas el 5% en democracias liberales —Chile, Costa Rica, Uruguay, Barbados y Trinidad y Tobago—; y el 29% vive bajo regímenes autocráticos.

Al mismo tiempo, distintos países atraviesan procesos de cambio en la calidad de sus instituciones democráticas: Argentina, El Salvador, Haití, México, Nicaragua y Perú presentan procesos de autocratización, mientras Bolivia, Brasil, Guatemala y República Dominicana registran procesos de democratización.

La tensión entre fortaleza institucional y legitimidad democrática también aparece en las opiniones de la ciudadanía. El 65% de la población de los 18 países relevados por el Barómetro de las Américas considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, frente al 59% registrado en 2023. Es, además, el valor más alto desde 2014.

El apoyo no es igual entre todos los grupos, ya que llega al 58% entre quienes sufrieron falta de alimentos en el último tiempo, frente al 67% entre quienes no tuvieron esa experiencia. Entre quienes recibieron un pedido de soborno policial, alcanza al 56%. Estas diferencias muestran una asociación entre experiencias cotidianas de seguridad y bienestar y la confianza democrática.

El apoyo a la democracia también puede convivir con la aceptación variable de límites a sus reglas. En El Salvador, República Dominicana, Honduras y Guatemala, más del 60% expresa alto respaldo a posiciones que admiten restringir el papel de la oposición, los jueces o los derechos de las minorías (Gráfico SOP.1).

En ocho países, las personas más favorables a estas posiciones también tienden a expresar mayor apoyo a la democracia. El Salvador y República Dominicana ilustran esa coexistencia, con más del 70% de respaldo a la democracia y elevada aceptación de estas posturas.

Estos datos sugieren que una parte de la ciudadanía puede valorar la capacidad de los gobiernos para producir resultados incluso cuando algunas medidas afectan los controles y límites del poder.

En esta línea, la seguridad ocupó un lugar central en las campañas electorales de la región, en un contexto en el que la violencia y el crimen organizado se encuentran entre las principales preocupaciones sociales y políticas.

En 2025 se registraron al menos 108.838 homicidios en la región, menos que en 2024. Pese a esa reducción, América Latina y el Caribe concentra cerca de un tercio de los homicidios mundiales, aunque reúne alrededor del 9% de la población mundial.

Las diferencias nacionales son muy marcadas: Haití registró una tasa de 68 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a 1,3 en El Salvador. Ecuador alcanzó un máximo histórico

de 50,9, mientras en Haití el avance de los grupos armados también generó una grave crisis de desplazamiento. Como se mencionó, una disminución regional de los homicidios no implica una mejora igual en todos los países ni permite medir por sí sola la presencia y el poder del crimen organizado.

Frente a este escenario, varios gobiernos respondieron mediante medidas extraordinarias de seguridad. El Salvador prorrogó repetidamente su régimen de excepción y otros ocho países declararon o extendieron estados de emergencia por motivos de seguridad.

Al mismo tiempo, los sistemas penitenciarios funcionan, en promedio, al 149% de su capacidad y el 38,9% de las personas privadas de libertad no tiene condena. Esto obliga a evaluar las políticas de seguridad no solo por su alcance o intensidad, sino también por sus resultados y sus costos sociales e institucionales.

La influencia criminal, como se ha visto, también puede ejercerse sobre las instituciones. Los indicadores de percepción de corrupción y de Estado de derecho ayudan a describir contextos de mayor o menor fortaleza institucional, aunque no miden directamente la captura criminal del Estado.

Estos indicadores muestran patrones similares (Gráfico SOP.2). Uruguay, Barbados, Chile y Costa Rica registran un mejor desempeño, mientras Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en el extremo opuesto. Las zonas Bolivariana y CAMEX presentan los promedios más desfavorables, y el Estado de derecho retrocedió en 23 de los 32 países relevados.

Estas debilidades institucionales pueden coexistir con formas de gobernanza criminal. Una estimación citada en el informe señala que más de 100 millones de personas vivirían en América Latina bajo alguna de ellas.

Colombia, México, Ecuador y Paraguay se encuentran entre los países con mayores puntajes de criminalidad (Gráfico SOP.3). La zona Bolivariana tiene un promedio elevado,asociado a la presencia de áreas de producción y corredores de salida de cocaína, mientras Venezuela registra una de las menores capacidades de respuesta frente al crimen organizado en el continente.

En México y Centroamérica conviven situaciones distintas: México concentra elevados niveles de mercados criminales; el norte de Centroamérica presenta una fuerte incidencia de episodios de extorsión; El Salvador redujo significativamente su criminalidad, aunque con niveles de resiliencia que no evolucionaron en la misma dirección; y Costa Rica presenta el mejor nivel de resiliencia de la zona.

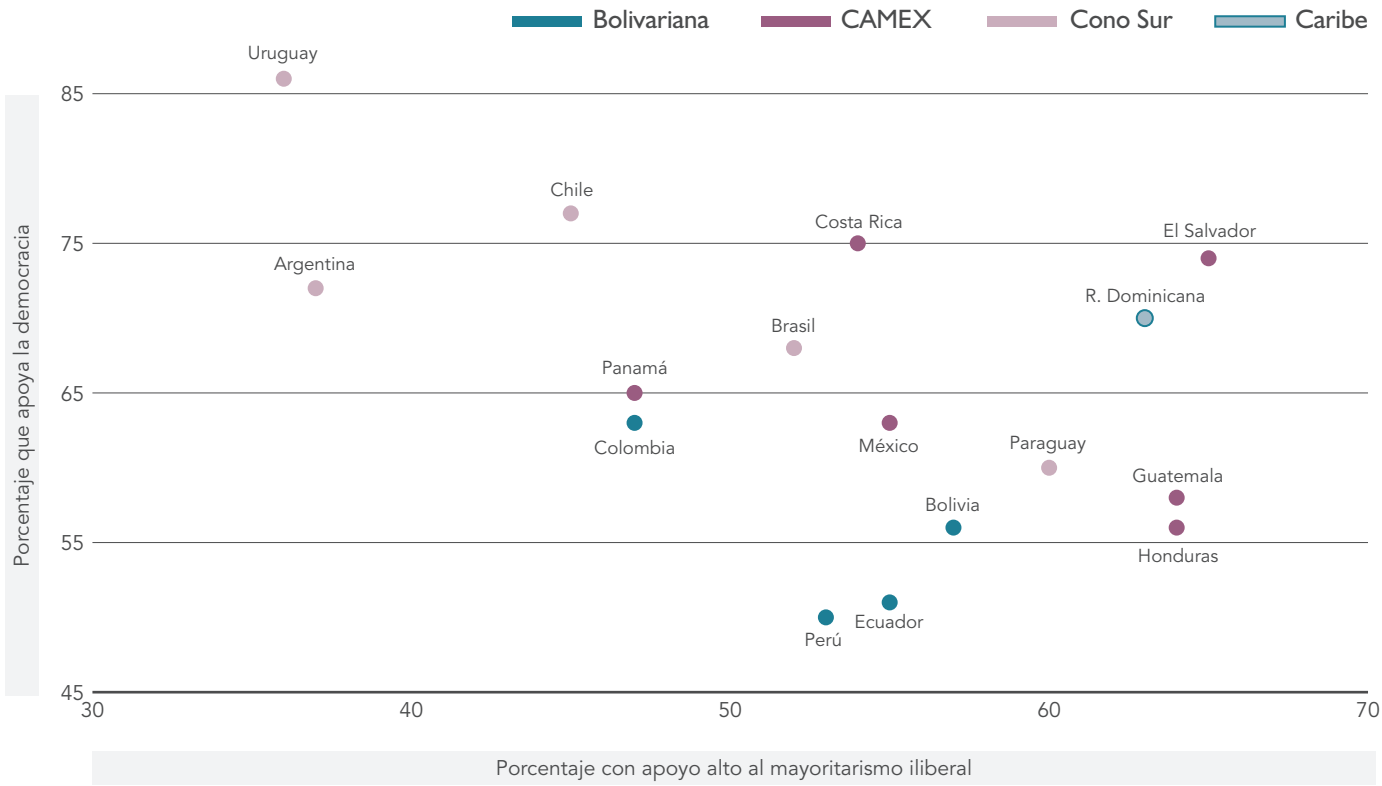
El Caribe presenta grandes diferencias entre países, con Haití en una situación especialmente grave. El Cono Sur registra una resiliencia promedio mayor, pero enfrenta desafíos como el papel de Paraguay como nodo logístico de las redes de tráfico ilegal trasnacional y la penetración institucional asociada a actividades criminales.

La seguridad y la lucha contra el narcotráfico se volvieron centrales en la cooperación con Estados Unidos y en las tensiones geopolíticas regionales. Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a 20 grupos criminales de ocho países de la región y, desde septiembre de 2025, llevó adelante 78 ataques contra embarcaciones vinculadas a actividades ilícitas.

En enero de 2026, además, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una operación militar en Venezuela. En este nuevo escenario, la cooperación antidrogas adquiere una dimensión de alineamiento político que puede profundizar las diferencias entre los países de la región.

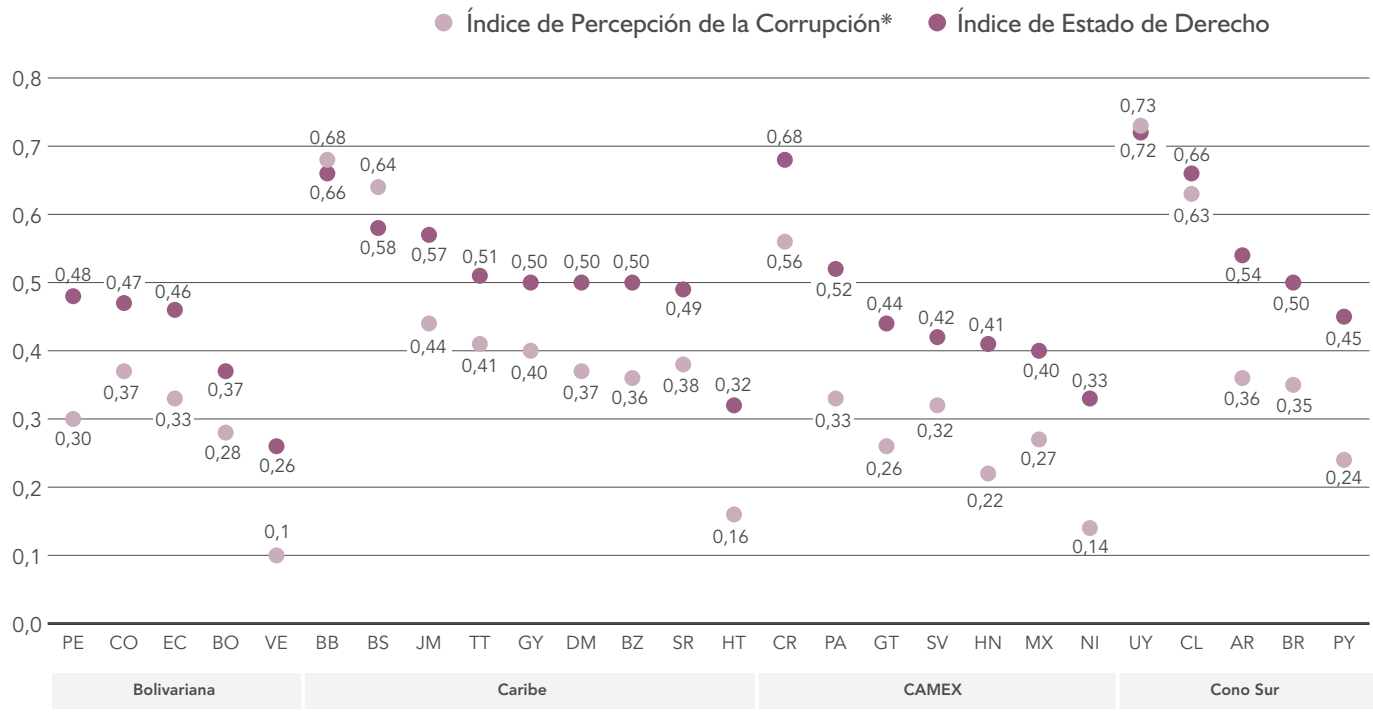
En conjunto, el diagnóstico muestra una región donde la democracia conserva apoyo ciudadano, pero convive con exigencias crecientes de seguridad y eficacia estatal. El desafío está en sostener elecciones competitivas, a la vez que preservar los controles institucionales, los derechos y los espacios de participación en contextos atravesados por violencia y desigualdad.

Gráfico SSP.1. Apoyo a la democracia y apoyo al mayoritarismo iliberal, según países y zonas CELAM, 2026. En porcentajes.



Nota: Eje horizontal, porcentaje de la población con apoyo alto al índice de mayoritarismo iliberal (limitar la voz de la oposición y de los jueces, ignorar las leyes que obstaculizan al presidente o pasar por encima de los derechos de las minorías); eje vertical, porcentaje que prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe "Barómetro de las Américas 2026" (Córdova y de Freitas, 2026; Dean et al., 2026).

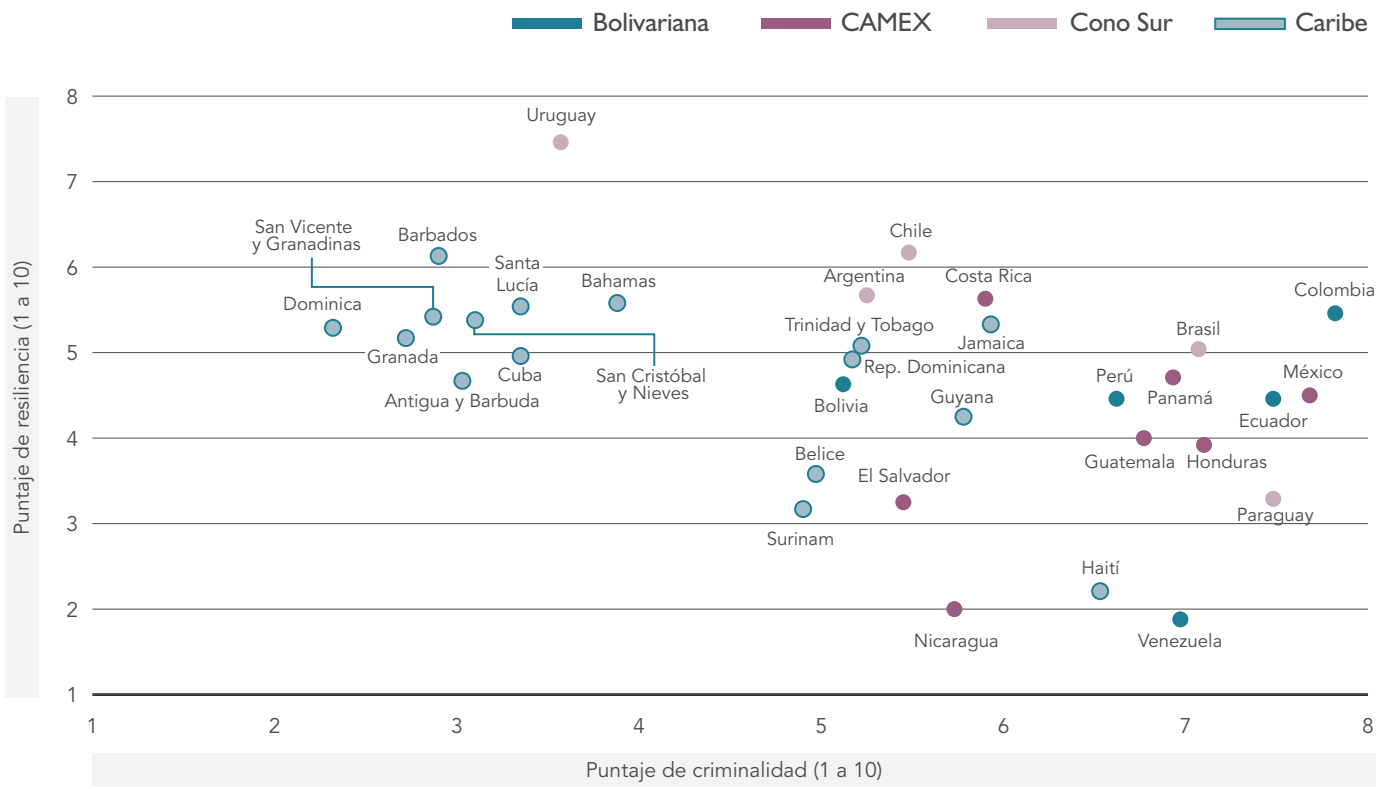
Gráfico SSP.2. Índice de Percepción de la Corrupción e Índice de Estado de Derecho, según países y zonas CELAM, 2025. Puntaje de 0 a 1.



Nota: *El Índice de Percepción de la Corrupción (0 = muy corrupto; 100 = muy limpio) se reescaló a 0-1 dividiendo por 100. En ambos índices, un puntaje mayor indica una situación más favorable. Dentro de cada zona, los países se ordenan según el Índice de Estado de Derecho. Cuba no figura en el Índice de Estado de Derecho. Países identificados con su código ISO de dos letras.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe "Índice de Percepción de la Corrupción 2025" (Transparencia Internacional, 2026), y el informe "Índice de Estado de Derecho 2025" (World Justice Project, 2025).

Gráfico SSP.3. Criminalidad y resiliencia frente al crimen organizado, según países y zonas CELAM, 2025. Puntaje de 1 a 10.



Fuente: Elaboración propia a partir del informe "Índice global de crimen organizado 2025" (GI-TOC, 2025).

3.D. Situación socioambiental

El informe aborda la situación ambiental desde la desigualdad ecológica, en tanto se busca registrar el deterioro del ambiente e identificar quiénes están más expuestos a sus efectos, quiénes pueden protegerse y recuperarse y cómo se distribuyen los beneficios y los costos del aprovechamiento de los recursos naturales. Esta mirada conecta la crisis ambiental con las desigualdades sociales y territoriales de América Latina y el Caribe.

En principio, hace ya tiempo que el cambio climático tiene efectos visibles. En 2025 se registraron temperaturas muy altas y continuó la tendencia de calentamiento de alrededor de 0,26 °C por década en América del Sur desde 1991.

Durante ese año, México alcanzó una temperatura extrema de 52,7 °C y una sequía que afectó gran parte de su territorio; y Perú y Ecuador sufrieron inundaciones severas. En 17 países de la región, el calor provoca unas 13.000 muertes anuales y cerca de 90 millones de personas dependen del agua de glaciares andinos en retroceso.

Entre 2022 y 2025 se registraron 304 desastres de origen natural en la región, con 4.605 personas fallecidas y 48,2 millones de personas afectadas. Tres de cada cuatro eventos fueron inundaciones, tormentas o ciclones.

Los impactos fueron muy distintos según la zona (Gráfico SSA.1). Las diferencias reflejan tanto la intensidad y el tipo de amenaza como las condiciones sociales y la capacidad de respuesta de cada territorio.

- En el Caribe ocurrió el 18,8% de los desastres, pero se concentró el 39,2% de las personas afectadas: unos 18,9 millones, principalmente por tormentas y ciclones.
- El Cono Sur registró el 28% de los eventos y el 14,2% de las personas afectadas.
- En México y Centroamérica (CAMEX), las inundaciones explicaron tres de cada cuatro personas afectadas.
- En la zona Bolivariana, la sequía afectó a 3,2 millones de personas; dos millones de ellas se encontraban en Bolivia.

La exposición a fenómenos extremos no determina por sí sola la magnitud de sus consecuencias. Son más bien las condiciones de vivienda, el acceso a servicios básicos, la infraestructura y las redes de cuidado las que influyen sobre la capacidad de las comunidades de prevenir daños, responder y recuperarse.

La crisis ambiental se articula, a su vez, con la demanda mundial de minerales requeridos por la transición energética, donde América Latina participa de manera importante en la extracción y producción de varios recursos (Gráfico SOA.2).

En 2025, la región aportó al menos el 38% del cobre producido en el mundo, el 31% del litio y el 52% de la plata. Chile y Perú destacan en cobre; Chile, Argentina y Brasil en litio; y México en plata. La importancia estratégica de estos recursos abre oportunidades, pero también plantea cómo repartir los beneficios y los costos de la extracción.

La transformación local de estos minerales sigue siendo limitada. En 2025, América Latina refinó solo el 20% de los minerales energéticos clave que extrajo, sin contar el litio. Así, parte importante del valor agregado y del empleo asociado al procesamiento se genera fuera de los territorios productores.

En ellos, en cambio, se concentran algunos de los impactos ambientales y sociales más relevantes: en Colombia, 94 títulos mineros se superponen con territorios indígenas o comunitarios; en el desierto de Atacama, la actividad minera se vincula con el agotamiento de acuíferos; y la extracción de litio en salares compromete las reservas de agua subterránea en zonas particularmente áridas.

A ello se suman más de 250 conflictos vinculados con proyectos mineros en la región y la concentración de asesinatos de personas opositoras a proyectos mineros entre las actividades extractivas.

Los límites de este modelo se expresan, entretanto, en la pérdida de ecosistemas y en una creciente presión sobre recursos esenciales. Entre 2015 y 2025, América del Sur perdió 4,22 millones de hectáreas de bosque por año, el 39% de la deforestación mundial. Chile y México figuran entre los países con mayor presión sobre sus recursos hídricos.

Estos procesos ponen en riesgo el agua, la biodiversidad y las condiciones que permiten sostener la vida y las actividades económicas en distintos territorios.

A los problemas ambientales se suma la expansión de las economías ilegales. La minería ilegal de oro adquirió una rentabilidad creciente en la Amazonía y, en Colombia y Perú, genera desde al menos 2016 ingresos superiores a los del tráfico de cocaína.

La deforestación acumulada vinculada con la minería de oro alcanzó 2,02 millones de hectáreas en 2024, de las cuales el 36% se encontraba dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Brasil concentra el 55,3% de esa superficie, seguido de Guyana y Surinam.

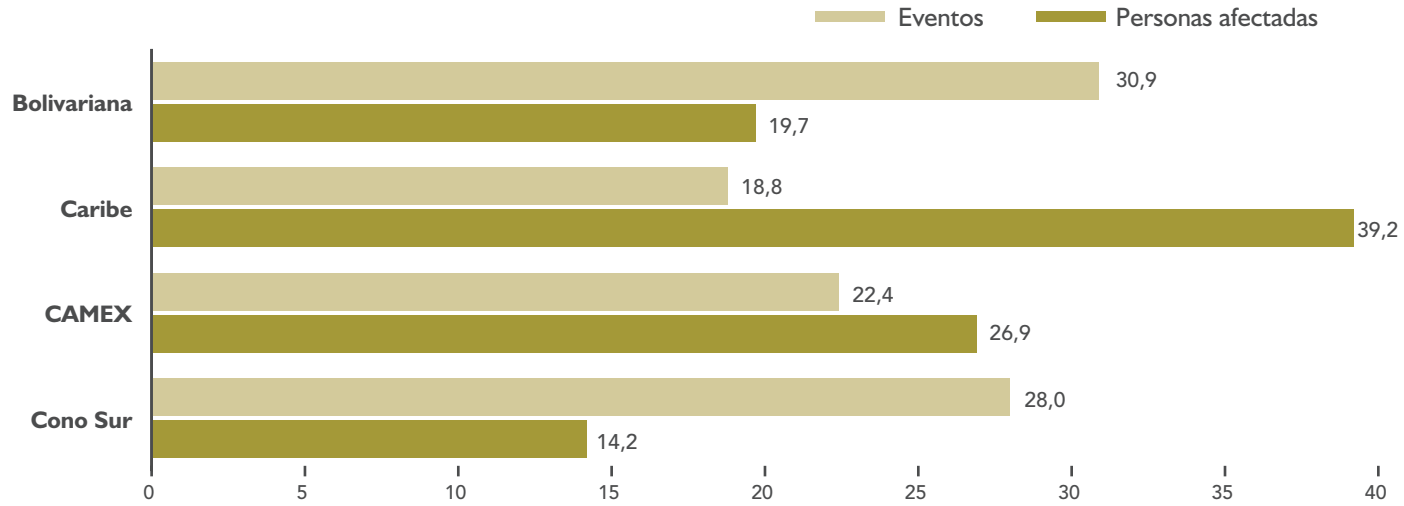
En estos contextos aumentan los riesgos para quienes defienden los bienes naturales y sus comunidades. En 2025, América Latina concentró 105 de los 124 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente registrados en el mundo. Colombia tuvo 39 casos; Brasil, 26; Honduras, 12; México, 10; y Guatemala, 8. Más de tres de cada cuatro víctimas eran pequeños agricultores, personas indígenas o afrodescendientes.

Las disputas por la tierra estuvieron detrás de más de la mitad de los casos y más de un tercio estuvo vinculado con el crimen organizado o con sicarios. Esta última distinción resulta relevante porque la violencia ambiental no proviene exclusivamente de actividades ilegales, sino también de conflictos asociados con actores y proyectos formalmente legales.

El diagnóstico muestra una doble realidad. América Latina y el Caribe afronta daños crecientes por el cambio climático y el deterioro ambiental, mientras ocupa una posición importante en la producción de recursos naturales para la economía mundial.

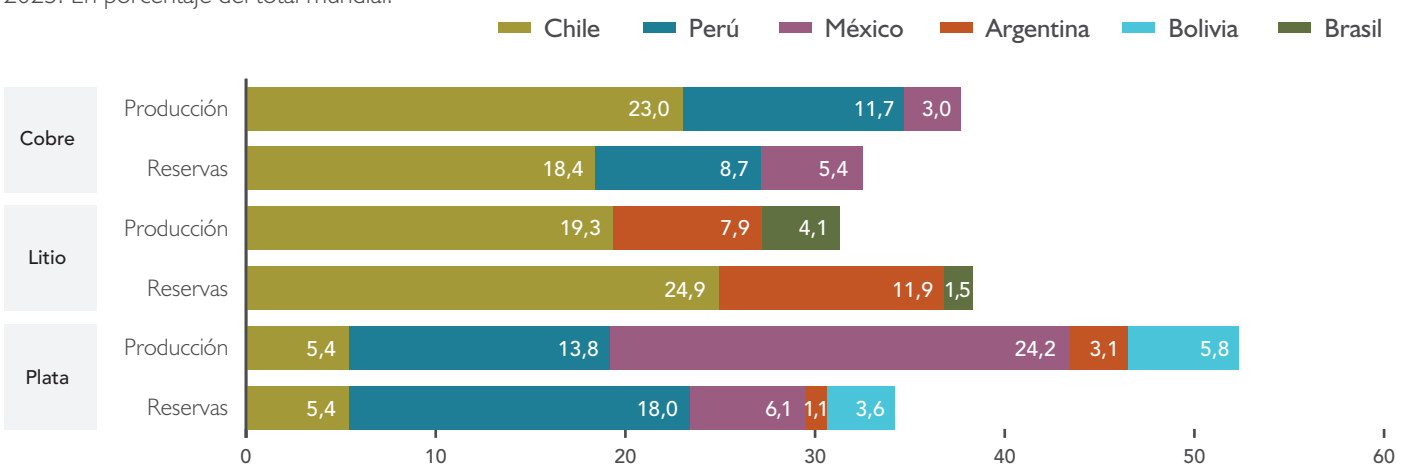
El desafío es transformar esa posición en mejores condiciones de vida para las comunidades, con mayor protección ambiental y una distribución más justa de los beneficios y los costos (Diagrama SSA.1).

Gráfico SSA.1. Distribución de los desastres y de las personas afectadas por zona CELAM. En porcentaje del total regional de desastres acumulado entre 2022 y 2025.



Fuente: Elaboración propia a partir de CRED, EM-DAT (2026).

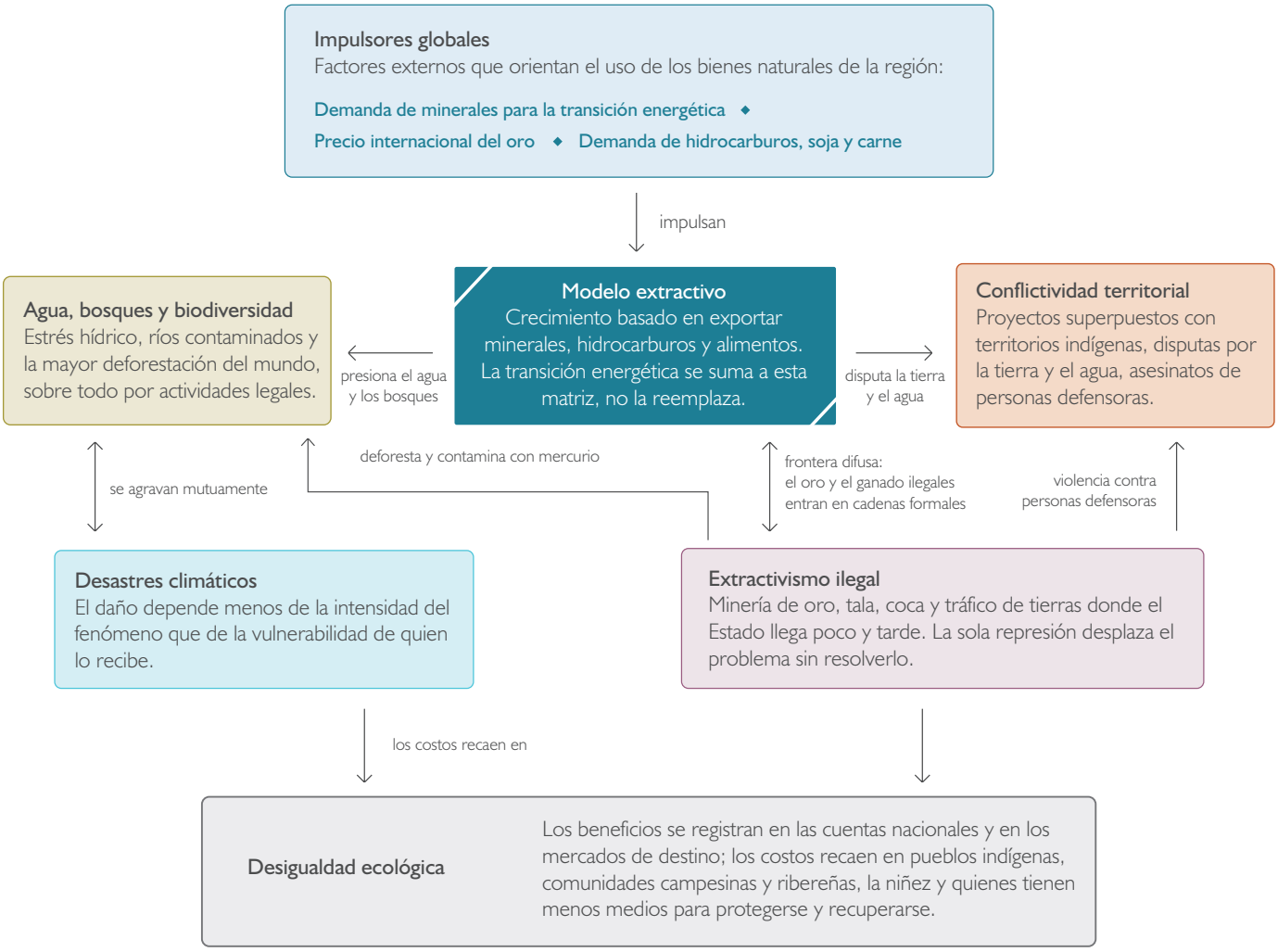
Gráfico SOA.2. Participación de países de América Latina en la producción minera y en las reservas mundiales de cobre, litio y plata, 2025. En porcentaje del total mundial.



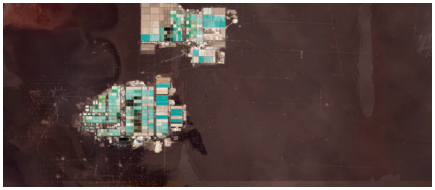
Nota: Producción estimada para 2025 y reservas económicamente explotables; solo países que USGS informa por separado. Bolivia no informa reservas de litio, pero registra 23 millones de toneladas de recursos medidos e indicados.

Fuente: Elaboración propia a partir de "Mineral Commodity Summaries 2026" (USGS, 2026).

Diagrama SSA.1. Desigualdad ecológica: presiones ambientales, actividades extractivas y distribución de sus efectos.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de ONU (2000), Lessing (2021), Dammert y Sampó (2025), Luna y Feldmann (2025), Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2026a, 2026b), Mondaca Cota (2018) y Torres Gómez (2026).



Conclusiones

Avances parciales frente a desafíos estructurales persistentes

El balance de América Latina y el Caribe para el bienio 2025-2026 presenta señales de mejora, pero todavía insuficientes para transformar las condiciones estructurales de la región.

La reducción de la pobreza, la moderación de la inflación y algunos avances en el empleo conviven con un crecimiento económico débil, altos niveles de informalidad y desigualdad, fragilidad institucional y una creciente exposición a la violencia y los riesgos ambientales. La región no atraviesa un retroceso generalizado, pero tampoco una mejora sostenida que alcance por igual a sus pueblos y territorios.

Esta realidad pone de manifiesto que los avances económicos y sociales no se traducen automáticamente en mejores oportunidades para todos. Las desigualdades siguen condicionando quiénes pueden beneficiarse de las transformaciones en curso y quiénes soportan sus mayores costos. A su vez, el crimen organizado, el deterioro ambiental y las tensiones democráticas plantean desafíos que trascienden las capacidades de respuesta de las comunidades y, en muchos casos, las fronteras nacionales.

Frente a este panorama, la Iglesia puede desempeñar un papel relevante al poner el conocimiento de la realidad al servicio del diálogo social y de la acción colectiva. Su presencia territorial, articulada con la investigación social, permite hacer visibles situaciones que las estadísticas no siempre alcanzan a reflejar.

Esa tarea tiene también un sentido ético que la reflexión teológico-pastoral de este documento pone de relieve, al advertir que la invisibilización —olvidar y marginar a quienes sufren— es quizá la forma más extrema de exclusión. Y desde la investigación social, aquello que no se mide ni se nombra difícilmente llega a la agenda pública.

Desde esta perspectiva, resulta necesario fortalecer una acción comunicativa que contribuya a sensibilizar sobre las desigualdades y sus consecuencias, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Al mismo tiempo, la Iglesia puede promover espacios de encuentro y cooperación entre gobiernos, organizaciones sociales y comunidades, e impulsar una agenda pública centrada en la creación de empleo decente, la protección social, el fortalecimiento democrático, la prevención de la violencia y el cuidado de los bienes naturales.

Como se planteó inicialmente, conocer la realidad constituye un punto de partida para transformarla. Nuestro desafío no consiste únicamente en reconocer los problemas que persisten, sino en convertir ese conocimiento en propuestas, acuerdos y acciones concretas. En este horizonte, el compromiso pastoral y social de la Iglesia puede contribuir a construir respuestas que pongan en el centro la dignidad de las personas, la justicia social y el bien común.

Fuentes de gráficos y diagramas

Banco Mundial (2026a). Perspectivas de la economía global, Junio 2026.

Banco Mundial (2026b). Panorama económico de América Latina y el Caribe: aprovechando la transición de la IA. Octubre 2026.

Carrión Mena, F. (2026). La economía criminal en América Latina: una aproximación a su magnitud. Revista de Pensamiento Estratégico, 1, 66-78.

CEPAL (2025a). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2025. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CEPAL (2025b). Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CEPAL (2026). Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2026: crecimiento y productividad en un contexto de alta informalidad. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Córdova, A. y de Freitas, G. (2026). Support for illiberal majoritarianism: A new index of democratic commitment. En N. Lupu y M. Rodríguez (eds.), The Pulse of Democracy 2026 (pp. 66-71). LAPOP Lab, Vanderbilt University.

CRED (2026). EM-DAT: The International Disaster Database [base de datos; extracción del 21 de septiembre de 2026]. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, UCLouvain. https://www.emdat.be

Dammert, L. y Sampó, C. (2025). What Do We Know about Organized Crime in Latin America and the Caribbean? Trends, Definitions and Risks for Democracy (UNDP LAC Working Paper Series n.° 46). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Dean, A., Rodríguez, M., Vidigal, R. y Zechmeister, E. J. (2026). What buys goodwill toward democracy? En N. Lupu y M. Rodríguez (eds.), The Pulse of Democracy 2026 (pp. 46-59). LAPOP Lab, Vanderbilt University.

FAO (2025). Evaluación de los recursos forestales mundiales 2025. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Garay Salamanca, L. J. y Salcedo-Albarán, E. (2026a). Crimen, violencia y corrupción: modelo heurístico para analizar el tránsito a Estados híbridos. Consideraciones sobre la experiencia de Colombia, México y Venezuela (Vortex Working Paper n.° 75). Fundación Vortex; SciVortex Corp

Garay Salamanca, L. J. y Salcedo-Albarán, E. (2026b). Financiamiento criminal de la política, cooptación institucional y reconfiguración del Estado: distinciones analíticas con el financiamiento ilícito, riesgos institucionales y propuestas de política pública. Transparencia por Colombia; Fundación Vortex

GI-TOC (2025). Índice global de crimen organizado 2025: el crimen en una encrucijada. Global Initiative against Transnational Organized Crime. https://ocindex.net/report/2025/

Global Witness. (2026, 16 de septiembre). At least 124 land and environmental defenders killed globally in 2025 [Comunicado de prensa del informe anual Collective power]. https://globalwitness.org/en/press-releases/at-least-124-land-and-environmental-defenders-killed-globally-in-2025/

IDMC (2026). 2026 Global Report on Internal Displacement (GRID 2026). Internal Displacement Monitoring Centre.

International Crisis Group. (2026). El saqueo de la selva: blindar a la Amazonía del crimen organizado (Informe sobre América Latina N.° 111). International Crisis Group.

Lessing, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on Politics, 19(3), 854-873. https://doi.org/10.1017/S1537592720001243

Luna, J. P. y Feldmann, A. E. (2025). Criminalidad y democracia en América Latina. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). https://doi.org/10.31752/idea.2025.89

MAAP (2025, 4 de mayo). MAAP #226: AI to detect Amazon gold mining deforestation – 2024 update. Amazon Conservation. Monitoring of the Andes Amazon Program. https://www.maapprogram.org/amazon-mining-2024/

Mondaca Cota, A. (2018). La fenomenología de la narcocultura y su universo simbólico. Graffylia, Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, 3(5), 73-89.

Nord, M., Altman, D., Fernandes, T., Good God, A. y Lindberg, S. I. (2026). Informe sobre la democracia 2026: ¿El fin de la era democrática? Instituto V-Dem, Universidad de Gotemburgo.

OCMAL (2026). Mapa de conflictos mineros de América Latina [Base de datos en línea]. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. https://www.ocmal.org

OIT (2026). Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe. Organización Internacional del Trabajo

OLACDE. (2026). Panorama 2025: producción y comercio exterior de petróleo y gas natural en América Latina y el Caribe (ALC) [Documento de trabajo].

ONU (2000). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Resolución 55/25 de la Asamblea General), art. 2.

ONU-DAES (2026). World Economic Situation and Prospects as of mid-2026. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas

UNICEF. (2026). Children's climate risk report 2026. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

USGS (2026). Mineral Commodity Summaries 2026. U.S. Geological Survey.

Torres Gómez, A. (2026). El algoritmo de la violencia: narcocultura digital, necropolítica y la seducción simbólica de la juventud mexicana. Ibero Ciencias – Revista Científica y Académica, 5(1), 794-807. https://doi.org/10.63371/ic.v5.n1.a691

Transparencia Internacional (2026). Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Transparency International

World Justice Project (2025). WJP Rule of Law Index 2025. WJP

World Inequality Lab (2026) World Inequality Report 2026.

Reflexiones Teológico-Pastorales

Idolatría y desigualdad

José Carlos Caamaño
Pontificia Universidad Católica Argentina – Facultad de Teología

Introducción

En una lectura atenta de la Biblia podemos descubrir la honda vinculación entre la relación genuina con Dios y su manifestación en la justicia hacia los más vulnerables, los que sufren, los que son invisibilizados. Desde los escritos proféticos del Antiguo Testamento hasta la predicación de Jesús y los escritos apostólicos, la idolatría aparece asociada no solamente a un error religioso, sino también a una deformación de las relaciones humanas que desemboca en la marginación de los pobres y en la indiferencia ante el sufrimiento. Por ello, la denuncia bíblica de los falsos dioses se dirige simultáneamente contra las estructuras de pecado que generan desigualdad y exclusión.

Un texto particularmente paradigmático lo encontramos en Génesis 4, 1-16. Se trata del asesinato de Abel por manos de su hermano Caín. Sin embargo, en esa expresión violenta, el destinatario principal del crimen no es Abel. Caín a quien quiere matar es a Dios, quiere apoderarse de Aquel que ha rechazado su ofrenda, pero no puede. Matar al hermano es la única forma posible de realizar su endiosamiento.

De allí que el culto a Dios se deba manifestar en vivir y cuidar a los otros como hermanos, pues son para nosotros el rostro de Dios.

Esta perspectiva fue elocuentemente señalada por los profetas que comprendieron que el culto auténtico a Dios no puede separarse de la práctica de la justicia. De igual manera, el Nuevo Testamento presenta la fe cristiana como una respuesta integral al Dios revelado en Jesucristo, cuya presencia se descubre de manera privilegiada en el necesitado. La relación entre idolatría y desigualdad constituye, por tanto, una clave hermenéutica fundamental para comprender el mensaje bíblico sobre Dios y la vida social.

El presente trabajo pretende analizar, en primer lugar, la crítica profética a los falsos dioses y su estrecho vínculo con la falta de caridad hacia quienes sufren. En segundo lugar, estudia cómo la revelación bíblica enseña que creer en Dios implica necesariamente abrir los ojos al sufrimiento del hermano necesitado y comprometerse con él. Finalmente pretendo

proponer algunos elementos de la dinámica idolátrica como constitutiva de las lógicas de desigualdad.

1. La crítica profética a los falsos dioses y su relación con la desigualdad social

1.1. La idolatría como negación del señorío de Dios

La idolatría constituye uno de los pecados más severamente condenados en la Biblia. El primer mandamiento prohíbe explícitamente la adoración de otros dioses: «No tendrás otros dioses frente a mí» (Ex 20,3). Sin embargo, será en la tradición profética donde se comience a manifestar más concisamente que la idolatría no se limita a la fabricación material de imágenes o estatuas con la pretensión de encerrar lo divino, o a la adoración de Dioses extranjeros. En realidad, ella radicaba en otorgar carácter absoluto a realidades creadas, colocándolas en el lugar que corresponde únicamente a Dios. Jeremías denuncia esta situación cuando describe el abandono de Yahvé como fuente de vida: «Porque, dos males ha hecho mi pueblo: me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua» (Jer 2,13).

El mecanismo idolátrico aquí radica en depositar la confianza en una seguridad pasajera. En saciar nuestra sed de seguridad en el poder, la riqueza, las alianzas espurias otorgándoles un lugar último del que carecen. Regresaremos a esta cuestión en el apartado sobre las dinámicas de la idolatría a la luz de la propuesta de Tillich.

Walter Brueggemann nos recuerda que la idolatría denunciada por los profetas implica siempre la construcción de sistemas alternativos de seguridad que terminan justificando distintas formas de opresión social.[3]

En este sentido, la idolatría posee una dimensión social y política. No constituye únicamente un problema de culto, sino también una perversión de las relaciones humanas.

1.2. La denuncia de Amós: culto religioso y opresión de los pobres

Entre los profetas es Amós quien proclama con mayor claridad la conexión entre la falsa religiosidad y la injusticia social. Durante el siglo VIII a.C., el Reino del Norte atravesaba un período de prosperidad económica. Sin embargo, dicha riqueza beneficiaba principalmente a las clases dirigentes, mientras los sectores más pobres eran sometidos a diversas formas de explotación. Frente a esta situación, Amós exclama: «Venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias» (Am 2,6). Esta terrible denuncia señala los abusos cometidos contra los campesinos, la corrupción de los jueces y el enriquecimiento ilegítimo de las élites.

Lo sorprendente es que esta crítica aparece unida a una severa condena del culto. En efecto, bajo la pureza del culto se amparaba el desinterés por las necesidades de los demás. Por eso pone en boca de Dios la terrible sentencia: «Odio y desprecio vuestras fiestas, no me agradan vuestras solemnidades» (Am 5,21). Y advierte sobre el juicio de esta máscara de una moral escondida en la pura dinámica ritual: «Que fluya el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne» (Am 5,24). Sicre afirmará que Amós inaugura una

3. Cf. Walter Brueggemann, *Teología del Antiguo Testamento. Testimonio, disputa y defensa* (Salamanca: Sígueme, 2007), 736-744.

de las intuiciones más revolucionarias del profetismo bíblico declarando que la justicia social tiene prioridad sobre cualquier manifestación exterior de religiosidad.[4]

La desigualdad social es presentada aquí como consecuencia de una infidelidad religiosa profunda. Detrás de la explotación económica se encuentra una forma de idolatría que ha sustituido la voluntad de Dios por la búsqueda egoísta del beneficio mimetizada en una moral meramente prescriptiva y ritual.

1.3. Isaías: la falsa religión y el abandono de los débiles

En Isaías encontramos una argumentación de mucha similitud. En el primer capítulo de su obra encontramos una de las denuncias más importantes del Antiguo Testamento contra una religión puramente formalista, donde se multiplican los sacrificios y las ofrendas olvidándose el corazón de la vida: «Lavaos, purificaos; apartad de mi vista vuestras malas acciones» (Is 1,16). En efecto, la verdadera conversión consiste en practicar la justicia:

«Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, socorran al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda» (Is 1,17). Eran aquellos que carecían de protección jurídica, no sólo eran pobres, eran invisibles, no existían, no poseían el amparo de la ley. De allí que son propuestos como el criterio para revelar la fidelidad del pueblo a la alianza. Es en esta perspectiva que Heschel indicará que los profetas perciben el sufrimiento humano desde la perspectiva misma de Dios.

Por ello, la indiferencia ante la injusticia equivale a una ofensa contra el Señor de la alianza.[5] Y la injusticia aquí consiste en que algunos quedan simplemente excluidos del amparo de la ley. La ley se reduce al cuidado del patrimonio y el poder de los privilegiados.

Nos encontramos con una superación de una visión meramente ritual del culto, al situarse una íntima vinculación entre teología y ética social: no existe verdadera adoración sin compromiso con los que son olvidados.

1.4. La idolatría de la riqueza y del poder

Pero debemos agregar un aspecto más. El olvido de los demás, es contemporáneo a la sobrevaloración de la riqueza y el poder. En esta perspectiva debemos ubicar la denuncia de Oseas cuando critica la confianza excesiva en las potencias extranjeras y en las capacidades militares de Israel: «Porque sembraron vientos, cosecharán tempestades» (Os 8,7). Denuncia así a la aspiración de dominio como aquello que lejos de garantizarnos vida, pone en peligro el sentido de nuestra existencia.

Ezequiel, por su parte, interpreta la corrupción de Jerusalén como consecuencia del orgullo y de la autosuficiencia: «Esta fue la culpa de Sodoma: orgullo, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad, mientras no socorría al pobre y al indigente» (Ez 16,49). Lo particularmente revelador de este último texto es que el profeta relaciona directamente la abundancia económica con la falta de solidaridad.

4. Cf. José Luis Sicre, *Los Profetas de Israel y su mensaje* (Estella: Verbo Divino, 2012), 177-184.
5. Cf. Abraham J. Heschel, *Los Profetas* (Buenos Aires: Paidós, 1973), 31-45.

La riqueza se transforma en idolatría cuando genera autosuficiencia y ceguera frente a las necesidades ajenas. Esta idolatría se manifiesta en la pérdida de la empatía y la solidaridad. Por ello, von Rad destaca que el hecho particularmente malvado y pecador se encuentra en sustituir a Dios por la confianza en las propias fuerzas, provocando relaciones de dominación y desigualdad.[6]

2. Creer en Dios es descubrir el sufrimiento del hermano

2.1. Dios escucha el clamor de los oprimidos

El Dios de la Biblia no es un absoluto apático. El relato de la vocación de Moisés constituye uno de los textos más expresivo de los sentimientos de Dios en sus entrañas: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas y conozco sus sufrimientos» (Ex 3,7).

De hecho, Dios nos he conocido pues la historia de salvación es su intervención liberadora. Es a esta experiencia histórica de liberación del yugo y las esclavitudes a la que se encuentra profundamente vinculada la fe de Israel. Este dato posee una enorme importancia teológica.

Dios no se revela al margen de la realidad humana, sino dentro de ella. Quien conoce a Dios participa también de su sensibilidad hacia quienes padecen injusticia. En este sentido la experiencia bíblica de Dios rompe toda tendencia a construir una religiosidad evasiva, pues sitúa al creyente frente a las exigencias concretas de la historia.[7]

Creer es mirar el mundo de este modo, descubriendo los lugares de opresión y olvido donde la dignidad humana es vulnerada, no con un interés pasivo sino con una preocupación activa por su transformación. El papa Francisco, pone especial atención en el capítulo 4 de ***Evangelii Gaudium***, el número 187, en una actitud que denomina "escuchar el clamor". Este clamor es de los postergados, y se eleva a Dios. A él se asocia la Iglesia, que debe ejercer el ministerio de esa escucha, hasta tal punto que «hacer oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque ese pobre "clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado (Dt 15, 9)"».

2.2. La misericordia como expresión de la fe

Los salmos y la literatura sapiencial enseñan constantemente que la compasión hacia el pobre forma parte esencial de la relación con Dios. El libro de los Proverbios afirma: «Quien se apiada del pobre presta al Señor» (Prov 19,17). El Eclesiástico añade: «El agua apaga el fuego ardiente, y la limosna perdona los pecados» (Ecl 3,30). Estas afirmaciones muestran que la atención al necesitado no constituye una práctica secundaria, sino una dimensión fundamental de la espiritualidad bíblica. La misericordia surge del reconocimiento de que todos los bienes proceden de Dios y están destinados al bien común. Cuando el ser humano se considera propietario absoluto de sus riquezas, cae nuevamente en la lógica idolátrica denunciada por los profetas.

6. Cf. Gerhard von Rad, *Teología del Antiguo Testamento I* (Salamanca: Sígueme, 1982), 233-241.
7. Cf. Juan Luis Segundo, *Teología abierta para el laico adulto I* (Buenos Aires: Carlos Lohlé, 1970), 85-94.

Pero hay algo más al respecto: El papa Francisco, a continuación del texto antes citado, Francisco, y remitiendo a Daniel 4,24, nos invita a ejercer misericordia con los pobres. ¿Qué significa esta misericordia? En la misericordia hay una desproporción. Ejercer misericordia significa compartir un don, que en cuanto tal, no posee la exigencia de la devolución proporcional. Pero que, a su vez, no deja pasivo al otro. El receptor de un don no se encuentra en condiciones de experimentar que le ha sido dado algo por derecho propio.

Por tanto, lo primero necesario para ejercer misericordia es descubrir que algo que poseo legítimamente, tiene una marca social. Hay algo que poseo que, en la medida que lo comparta, dejo de perderlo. Francisco traslada la lógica evangélica a la convivencia social: poseer la vida es perderla, entregarla es tenerla. Esta lógica aleja a la misericordia de la lástima o la condescendencia evasiva.

2.3. Jesucristo y la unidad entre amor a Dios y amor al prójimo

En el Nuevo Testamento esta enseñanza alcanza su máxima expresión. Cuando a Jesús le pregunten cuál es el mandamiento principal responderá. Cuando se le pregunta cuál es el mandamiento principal, Jesús responde: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente» (Mt 22,37). Inmediatamente añade: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Mt 22,39). La novedad consiste en que ambos mandamientos aparecen inseparablemente unidos. No pueden vivirse de forma independiente. La Primera Carta de Juan desarrolla esta idea con especial radicalidad: «Si alguno dice: "Amo a Dios", y aborrece a su hermano, es un mentiroso» (1 Jn 4,20).

De allí que la autenticidad de la fe se revele en el amor concreto hacia los demás. Esto nos aleja de interpretar la espiritualidad cristiana como una praxis de autoperfección alejada del rostro de los olvidados. La espiritualidad es encarnada pues sigue los pasos del modo como el Padre ha mostrado su rostro desde la carne del Hijo. Es en la carne de Cristo en donde se nos revela el misterio de la profundidad misteriosa de la divinidad. En un hermoso libro sobre la empatía divina Ruggiero Lattanzio recuerda que esta empatía procede de la intimidad mismo de Dios.

En el compromiso de Cristo con el sufrimiento humano, de los pobres, pero de todos los invisibilizados de su tiempo, es el misterio Trinitario el que se compadece con el mundo. Nada más próximo al modo de ser de Dios que ser plenamente nosotros mismos con capacidad de amar con generosidad.[8]

De empatía se nos habla en la parábola del buen samaritano. La clave de la parábola reside en la compasión. El samaritano ve al herido de manera distinta. Percibe una realidad que los otros han decidido ignorar. En ella se descubre al prójimo haciéndose cargo de su sufrimiento. En ella Jesús transforma la pregunta inicial sobre quién es el prójimo en una invitación a convertirse uno mismo en prójimo de quien sufre.[9]

El texto más decisivo para comprender la relación entre fe y solidaridad es probablemente Mateo 25,31-46. En la escena del juicio final, Jesús identifica su propia persona con los más necesitados: «Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed

8. Cf. Ruggiero Lattanzio, *Teologia della'empatia. La partecipazione empatica del Dio trinitario alle sofferenze del mondo* (Milano: Edizioni San Paolo, 2025).
9. Cf. Joachim Jeremias, *Las parábolas de Jesús* (Estella: Verbo Divino, 2000), 202-210.

y me disteis de beber; estaba desnudo y me vestisteis» (Mt 25,35-36). La sorpresa de los justos consiste precisamente en no haber reconocido a Cristo: «¿Cuándo te vimos hambriento o sediento?» (Mt 25,37).

La respuesta de Jesús constituye una de las afirmaciones más revolucionarias del cristianismo: «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). Aquí la relación entre Dios y el prójimo alcanza su máxima intensidad. El olvidado, el pobre, el despojado de sus derechos se convierte aquí en lugar teológico. Su carne doliente es la misma carne de Dios. Ellos se convierten aquí en el corazón mismo de la experiencia de Dios.[10]

Conclusión

Estas conclusiones no son el resultado de una rumia en soledad, sino fruto del diálogo con alguien a quien quiero y valoro mucho, pero prefirió no ser citado. Sin embargo, la honestidad me pide recordarlo en este pequeño gesto de gratitud.

Las reflexiones de esta contribución nos invitan a poner la mirada en la desigualdad en nuestro continente y su origen idolátrico. Para ello creo que servirá recordar lo que Paul Tillich nos enseñaba sobre la idolatría: «la idolatría es la elevación de una preocupación preliminar al estatuto de preocupación última».[11] Y mordiendo aún más el centro de la problemática indica que «algo esencialmente condicionado se toma como incondicional, algo esencialmente parcial se eleva a la universalidad, y a algo que es esencialmente finito se le da una significación infinita».[12]

La idolatría consiste entonces en una inversión ontológica. Una realidad relativa reclama para sí el lugar del absoluto. Lo creado pretende convertirse en fundamento del ser.

Desde esta perspectiva, la idolatría es mucho más amplia que la concepción tradicional derivada de la polémica bíblica contra las imágenes, es hacerse dioses perecederos. Una nación, una institución, una ideología, una teoría política, una tradición eclesiástica o incluso una formulación doctrinal pueden transformarse en ídolos cuando asumen una pretensión absoluta.

La idolatría no es sólo un error religioso; es una falsificación radical de la estructura de la realidad. Es una falsificación de la realidad, por ejemplo, que el cumplimiento de la ortodoxia de un plan económico, que concentra cada vez más la riqueza y los bienes culturales, conviva con la permanente peregrinación de mendigos en las ciudades de Latinoamérica.

Pero esta lógica conduce también a una pérdida general de la empatía. Ya no sólo de los pobres, sino de los que están al alcance de nuestra mano.[13] Aquí funciona la ley del titanismo moderno, descrito por las reflexiones del súper hombre y la crítica a la compasión, realizadas por Nietzsche. La lógica de poder nos enfrenta ya no sólo a los pobres, nos vuelve sobre nosotros mismos, nos endiosa en nuestra subjetividad y nos enfrenta con el cercano.

10. Cf. Gustavo Gutiérrez, *Teología de la liberación. Perspectivas* (Salamanca: Sígueme, 1972), 299-310.
11. Paul Tillich, *Teología Sistemática I. La razón y la revelación. El ser y Dios* (Barcelona: Ediciones Ariel, 1972), 26.
12. Tillich, *Teología sistemática I*, 28.
13. Cf. Lattanzio, *Teologia della'empatia*, 7.

Solos podemos ser dioses, para ello debemos matar a los que se vuelven un lastre y esto es posible si olvidamos la compasión. ***El Anticristo*** de Nietzsche es la descripción más desoladora de esta dinámica. Además, esta lógica, sanciona nuevas pobrezas, entre ellas, la del descarte de la invisibilización es, quizá, la más feroz. Los invisibles están comprendidos en aquella ampliación semántica de las pobrezas, realizada por el papa Francisco, en su propuesta de las «periferias existenciales». Ellas nos permiten profundizar en una nueva forma de cainismo: para que el prójimo muera ya no es necesario matarlo sino invisibilizarlo, olvidarlo, marginarlo. Se vuelve una forma sutil y silenciosa de crimen, resultado de la pérdida de la empatía que nos encierra en el propio aislamiento, convencidos de que la perfección se obtiene a través de la lógica del poder conquistado por un mérito individual, concebido como algo absolutamente merecido, sin ningún don previo, sin una apertura a la textura relacional de nuestra condición humana.

La globalización económica de la propuesta liberal, regulada por la alta concentración y la fuerte invisibilización de los expulsados, se vuelve una fuente de atención prioritaria para quien comprenda al cristianismo como una forma de construir la sociedad en la historia. La esperanza en aquella plenitud, prometida para el futuro, no es posible sino con los brazos tendidos a los olvidados.

En las Congregaciones Generales previas al Cónclave del 2013, Bergoglio afirmó: «La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no sólo las geográficas sino también las existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria». Esto definirá su comprensión de Iglesia en salida. Actitud que lleva la profunda impronta de un riesgo, del que habla en ***Evangelii gaudium*** 49: «Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro».

Nuevamente, somos invitados por Jesús, bajo el riesgo de quedar impuros, a ser samaritanos, a levantar al que está caído al costado del camino y llevarlo a la posada.

CELAM
CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO

CENTRO DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

ISBN 978-987-620-649-5